

DICIEMBRE 21 DE 1934

65ª REUNION — 7ª SESION EXTRAORDINARIA

Presidencia del doctor JULIO A. ROCA,

Vicepresidente de la Nación

y del doctor ROBUSTIANO PATRON COSTAS,

Presidente Provisorio del Senado

Ministro presente: de Hacienda, doctor Federico Pinedo.

Senadores presentes: Alberto Arancibia Rodríguez, Mario Hrcnas, Rudeoindo S. Campos, Ramón S. Castillo, Raúl Ceballos Reyes, Francisco E. Correa, Atanasio Eguiguren, Francisco R. Galíndez, Laureano Landaburu, Eduardo Laurencena, Lucio López Peña, Juan José Lubary, Pío Montenegro, Alfredo L. Palacios, Robustiano Patrón Costas, Guillermo Rothe, Matías G. Sánchez Sorondo, Antonio Santamarina, Carlos Serrey, Cruz Vera, Juan R. Vidal, Benjamín Villafañe.

Senadores ausentes, con aviso: Mario Bravo, Carlos A. Bruchmann, Aldo Cantoni, José Nicolás Matienzo, Carlos R. Porto, Lisandro de la Torre, Horacio Vera Ocampo.

Senador ausente, sin aviso: Mariano P. Ceballos.

SUMARIO

1.—Acta.

2.—Asuntos entrados:

I.—Comunicación de la Cámara de Diputados.  
II.—Peticiones particulares.

3.—Moción del senador Sánchez Sorondo, para que se considere en I n sesión de l a fecha, después del despacho sobre unificación de impuestos internos, el proyecto de ley, en revisión, que modifica la ley número 10.998, de Obras Sanitarias. Se aprueba.

4.—Consideración del dospncho de In Comisión de Presupuesto en el proyecto d a ley, en revisión, sobre unificación de impuestos internos. Se aprueba, quedando convertido en ley.

5.—Asuntos entrados:

III.—Comunicación de la Cámara de Diputados.

IV.—Despacho de comisión.

6.—Indicación del senador Campas para que se integre la Comisión de Presupuesto, mientras dure la ausencia del senador Bruchmann.

7.—Consideración del asunto a que se refiere el número 3 d o este sumario, s u aprueba, quedando convertido en ley.

8.—Apéndice.

—En Buenos Aires, a los veintiún días del mes de Diciembre de 1934, siendo la hora 16 y 55 minutos, dice 01:

## 1

## ACTA

**Sr. Presidente.** — Queda abierta la sesión. Se va a dar lectura del acta de la sesión anterior.

—Se lee y aprueba, sin observación.

—Entra al recinto y ocupa su banca el señor ministro de Hacienda, doctor Federico Pinedo.

## 2

## ASUNTOS ENTRADOS

**Sr. Presidente.** — Se va a dar cuenta de los asuntos entrados.

## I

## Comunicación de la Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados comunica que ha designado a los señores diputados Jacinto Oddone, Octavio Cordero y Alfredo Rodríguez, para integrar la Comisión Parlamentaria encargada de estudiar el funcionamiento de la Contaduría del Congreso. *(Al archivo).*

## II

## Peticiónes particulares

La Cámara Sindical Farmacéutica, formula observaciones al proyecto de ley impositiva en lo que se refiere al alcohol. *(A sus antecedentes).*

—Jubilados, pensionistas y empleados ferroviarios, solicitan que el Senado insista en su sanción a las reformas de la ley de jubilaciones ferroviarias. *(A sus antecedentes).*

—El Congreso Regional del Ferrocarril del Sud, de «La Fraternidad» y obreros del Ferrocarril del Sud, solicitan la aprobación de las reformas a la ley de jubilaciones ferroviarias, introducidas por la Cámara de Diputados. *(A sus antecedentes).*

—El Comité de Cámaras de Comercio Extranjeras de la República Argentina, formula observaciones al proyecto de ley sobre tasa adicional a los dividendos de acciones de sociedades anónimas. *(A sus antecedentes).*

—La Asociación del Profesorado Orquestal invita al Senado a los conciertos que realizará próximamente. *(Al archivo).*

—La Municipalidad de Pergamino, solicita la sanción del proyecto de ley de reformas al régimen de obras sanitarias. *(A sus antecedentes).*

## 3

## MOCION

**Sr. Sánchez Sorondo.** — Pido la palabra.

Antes de pasar al orden del día, voy a formular una moción que pido a mis honorables colegas apoyen, en el sentido de que inmediatamente de concluirse la consideración del proyecto de ley sobre unificación de impuestos internos, se trate el proyecto en revisión sobre modificaciones a la ley número 10.998, de Obras Sanitarias, que tiene despacho de la Comisión de Obras Públicas y ayer fué destinado a la orden del día.

**Sr. Serrey.** — Y al cual el Senado le acordó preferencia anteriormente.

**Sr. Presidente.** — Se va a votar la moción del señor senador por Buenos Aires.

—Se vota y resulta afirmativa.

**Sr. Presidente.** — Al orden del día.

## 4

## UNIFICACION DE IMPUESTOS INTERNOS

—Se lee:

## Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Presupuesto ha estudiado el proyecto de ley en revisión sobre unificación de impuestos internos; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su sanción con las siguientes modificaciones:

Artículo 9º — Después de: «recursos que tienen a perebir» agregar las palabras «de la Nación».

Artículo 18. — En el segundo párrafo, después de: «1935» agregar: «siempre que la adhesión se realice antes del 31 del mismo mes. Si la adhesión se produjera con posterioridad a esa fecha, el derecho a recibir las sumas que se le asignen correrá».

Artículo 25. — Se substituye el último párrafo de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados por el siguiente: «Estos impuestos regirán desde el 1º de Enero de 1935 y podrán ser reducidos, pero no elevados durante el término de diez años, salvo para el vino, en lo que respecta a los impuestos sancionados por la ley de creación de la Junta Reguladora de Vinos, aplicándose a los mismos las disposiciones de las leyes números 3.764, 4.363 y 11.252 que sean pertinentes.»

Sala de la comisión, Diciembre 18 de 1934.

Robustiano Patrón Costas. — Matías G. Sánchez Sorondo. — Rudecindo S. Campos.

En disidencia:

Eduardo Laurencena.

Diciembre 21 de 1934

CAMARA DE SENADORES

65ª Reunión. 7ª Sesión extraordinaria

Sanción de la H. Cámara de Diputados

Despacho de comisión: artículos modificados

## PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

Artículo 1º — Las provincias que se adhieran a las disposiciones de la presente ley, participarán en el producido de todos los impuestos internos nacionales al consumo, en la forma que se determina en los artículos siguientes.

Art. 2º — Toda provincia adherida percibirá durante el año 1935 una suma igual al promedio de la recaudación total que hubiere percibido durante los años 1929 a 1933 inclusive, por concepto de impuestos al consumo provincial, aumentado en un 10 %, o sea las siguientes cantidades:

PROVINCIAS	Promedio de recaudación	Aumento 10 %	Cantidades básicas
En miles de \$ m/n.			
Buenos Aires . . . . .	11.557	1.156	12.713
Santa Fe . . . . .	7.436	744	8.130
Córdoba . . . . .	6.091	609	6.700
Entre Ríos . . . . .	2.317	232	2.549
Tucumán . . . . .	1.914	191	2.105
Salta . . . . .	1.358	136	1.494
Santiago del Estero . . . . .	731	73	804
Mendoza . . . . .	579	58	637
Jujuy . . . . .	530	53	583
Corrientes . . . . .	429	43	472
San Luis . . . . .	416	42	458
San Juan . . . . .	194	19	213
La Rioja . . . . .	118	12	130
Catamarca . . . . .	111	11	122
Totales . . . . .	33.781	3.879	37.160

Art. 3º — A partir del 1º de Enero de 1936 se deducirá anualmente a cada provincia adherida, el 10 % de lo que le corresponda en virtud de lo establecido en el artículo anterior, de manera que la percepción por este concepto será la siguiente:

PROVINCIAS	1935 Cantidades básicas	1936 90 %	1937 80 %	1938 70 %
En miles de \$ m/n.				
Buenos Aires . . . . .	12.713	11.442	10.170	8.900
Santa Fe . . . . .	8.130	7.362	6.544	5.726
Córdoba . . . . .	6.700	6.030	5.360	4.690
Entre Ríos . . . . .	2.549	2.294	2.039	1.784
Tucumán . . . . .	2.105	1.894	1.684	1.473
Salta . . . . .	1.494	1.344	1.195	1.046
Santiago del Estero . . . . .	804	724	643	563
Mendoza . . . . .	637	573	510	446
Jujuy . . . . .	583	525	467	408
Corrientes . . . . .	472	425	378	330
San Luis . . . . .	458	412	366	321
San Juan . . . . .	213	192	170	149
La Rioja . . . . .	130	117	104	91
Catamarca . . . . .	122	110	98	85
Totales . . . . .	37.160	33.444	29.728	26.012

Diciembre 21 de 1934

CAMARA DE SENADORES

65ª Reunión. 7ª Sesión extraordinaria

Sanción de la H. Cámara de Diputados

Despacho de comisión: artículos modificados

PROVINCIAS	1939 60 %	1940 50 %	1941 40 %	1942 30 %
Buenos Aires . . .	7.630	6.356	5.085	3.814
Santa Fe . . . . .	4.908	4.090	3.272	2.454
Córdoba . . . . .	4.020	3.350	2.680	2.010
Entre Ríos . . . . .	1.529	1.275	1.020	765
Tucumán. . . . .	1.263	1.053	842	631
Salta . . . . .	896	747	597	448
Santiago del Estero .	482	402	322	241
Mendoza . . . . .	382	319	255	191
Jujuy . . . . .	349	291	233	175
Corrientes . . . . .	283	236	189	142
San Luis . . . . .	275	229	183	137
San Juan . . . . .	128	106	85	64
La Rioja . . . . .	78	65	52	39
Catamarca . . . . .	73	61	49	37
Totales . . . . .	22.296	18.580	14.864	11.148

PROVINCIAS	1943 20 %	1944 10 %
En miles de \$ m/n.		
Buenos Aires . . .	2.543	1.271
Santa Fe . . . . .	1.636	818
Córdoba . . . . .	1.340	670
Entre Ríos . . . . .	510	255
Tucumán. . . . .	421	211
Salta . . . . .	299	150
Santiago del Estero .	161	80
Mendoza . . . . .	126	64
Jujuy . . . . .	117	58
Corrientes . . . . .	94	47
San Luis . . . . .	92	46
San Juan . . . . .	43	21
La Rioja . . . . .	28	13
Catamarca . . . . .	24	12
Totales . . . . .	7.432	3.716

Las cantidades totales anualmente deducidas se repartirán a partir del 1º de Enero de 1936 entre las provincias adheridas en proporción a la población que a cada una de ellas asigne el último censo nacional aprobado por ley, correspondiendo por esta razón a cada provincia hasta el año 1939 inclusive, mientras no se apruebe por ley otro censo nacional, las siguientes cantidades:

Diciembre 21 de 1934

CAMARA DE SENADORES

65ª Reunión. 7ª Sesión extraordinaria

Sanción de la H. Cámara de Diputados

Despacho de comisión: artículos modificados

PROVINCIAS	1936 10 %	1937 20 %	1938 30 %	1939 40 %
En miles de \$ m/n.				
Buenos Aires . . . .	1.284	2.568	3.852	5.136
Santa Fe . . . . .	559	1.118	1.677	2.236
Córdoba . . . . .	457	914	1.371	1.828
Entre Ríos . . . . .	264	528	792	1.056
Tucumán . . . . .	207	414	621	828
Salta . . . . .	88	176	264	352
Santiago del Estero .	163	326	489	652
Mendoza . . . . .	172	344	516	688
Jujuy . . . . .	48	96	144	192
Corrientes . . . . .	216	432	648	864
San Luis . . . . .	72	144	216	288
San Juan . . . . .	74	148	222	296
La Rioja . . . . .	50	100	150	200
Catamarca . . . . .	62	124	186	248
Totales . . . . .	3.716	7.432	11.148	14.864

Art. 4º — Toda provincia adherida al régimen de esta ley, percibirá a partir del 1º de Enero de 1935, además de las cantidades indicadas en los artículos 2º y 3º, un suplemento que se les distribuirá proporcionalmente por población y que en conjunto para todas las provincias adheridas será en 1935 igual al 10 % de la cifra básica total establecida en el artículo 2º, aumentando en otro 10 % igual cada año posterior hasta el año 1939 en que será de 50 % o sea en la siguiente forma:

PROVINCIAS	1935 10 %	1936 20 %	1937 30 %
En miles de \$ m/n.			
Buenos Aires . . . .	1.284	2.568	3.852
Santa Fe . . . . .	559	1.118	1.677
Córdoba . . . . .	457	914	1.371
Entre Ríos . . . . .	264	528	792
Tucumán . . . . .	207	414	621
Salta . . . . .	88	176	264
Santiago del Estero .	163	326	489
Mendoza . . . . .	172	344	516
Jujuy . . . . .	48	96	144
Corrientes . . . . .	216	432	648
San Luis . . . . .	72	144	216
San Juan . . . . .	74	148	222
La Rioja . . . . .	50	100	150
Catamarca . . . . .	62	124	186
Totales . . . . .	3.716	7.432	11.148

Diciembre 21 de 1934

CAMARA DE SENADORES

65ª Reunión. 7ª Sesión extraordinaria

Sanción de la H. Cámara de Diputados

Despacho de comisión: artículos modificados

PROVINCIAS	1933	1939
	40 %	50 %
Buenos Aires . . . . .	5.136	6.420
Santa Fe . . . . .	2.236	2.795
Córdoba . . . . .	1.828	2.285
Entre Ríos . . . . .	1.056	1.320
Tucumán . . . . .	828	1.035
Salta . . . . .	352	440
Santiago del Estero . . . . .	652	815
Mendoza . . . . .	688	860
Jujuy . . . . .	192	240
Corrientes . . . . .	864	1.080
San Luis . . . . .	288	360
San Juan . . . . .	296	370
La Rioja . . . . .	200	250
Catamarca . . . . .	248	310
Totales . . . . .	14.864	18.580

Art. 5º — Por aplicación de los preceptos contenidos en los artículos anteriores, las cantidades totales a percibir por cada provincia adherida, durante los años 1935, 1936, 1937, 1938 y 1939, serán las siguientes:

PROVINCIAS	Recaudación		
	básica	1935	1936
En miles de \$ m/n.			
Buenos Aires . . . . .	12.713	13.997	15.294
Santa Fe . . . . .	8.180	8.739	9.039
Córdoba . . . . .	6.700	7.157	7.401
Entre Ríos . . . . .	2.549	2.813	3.086
Tucumán . . . . .	2.105	2.312	2.515
Salta . . . . .	1.494	1.582	1.608
Santiago del Estero . . . . .	804	967	1.213
Mendoza . . . . .	637	809	1.089
Jujuy . . . . .	583	631	669
Corrientes . . . . .	472	688	1.073
San Luis . . . . .	458	530	628
San Juan . . . . .	213	287	414
La Rioja . . . . .	130	180	267
Catamarca . . . . .	122	184	296
Totales . . . . .	37.160	40.876	44.592

Sanción de la H. Cámara de Diputados

Despacho de comisión: artículos modificados

<u>PROVINCIAS</u>	<u>1937</u>	<u>1938</u>	<u>1939</u>
Buenos Aires . . . . .	16.590	17.888	19.186
Santa Fe . . . . .	9.339	9.639	9.939
Córdoba . . . . .	7.645	7.889	8.188
Entre Ríos . . . . .	3.359	3.632	3.905
Tucumán . . . . .	2.719	2.922	3.126
Salta . . . . .	1.635	1.662	1.688
Santiago del Estero . . . . .	1.458	1.704	1.949
Mendoza . . . . .	1.370	1.650	1.930
Jujuy . . . . .	707	744	781
Corrientes . . . . .	1.458	1.842	2.227
San Luis . . . . .	726	825	923
San Juan . . . . .	540	667	794
La Rioja . . . . .	354	441	528
Catamarca . . . . .	408	519	631
Totales . . . . .	48.808	52.024	55.740

Art. 6º — Las provincias productoras de vino, alcohol y azúcar que se adhieran al régimen de esta ley percibirán durante el año 1935 el promedio de lo que en los años 1929 a 1933 inclusive hubieran recaudado por concepto de impuestos o tasas sobre esos productos, sobre las materias primas, subproductos y sus derivados o en concepto de comercialización o fiscalización a los productores o fabricantes de los mismos, o sea las siguientes cantidades:

<u>PROVINCIAS</u>	<u>Recaudación 1929-1933</u>	<u>Promedio</u>
En miles de \$ m/n.		
Mendoza . . . . .	83.311	16.662
San Juan . . . . .	37.759	7.552
Tucumán . . . . .	28.572	5.714
Jujuy . . . . .	8.532	1.706
Salta . . . . .	1.500	300
Totales . . . . .	159.674	31.934

Art. 7º — A partir del 1º de Enero del año 1936, las sumas a distribuir a las provincias mencionadas en razón de lo establecido en el artículo anterior decrecerán anualmente en 5 % del promedio básico hasta el año 1939 inclusive. A partir del 1º de Enero del año 1940 decrecerán en 2 % del promedio básico por año hasta llegar a ser el

Diciembre 21 de 1934

CAMARA DE SENADORES

65ª Reunión. 7ª Sesión extraordinaria

Sanción de la H. Cámara de Diputados

Despacho de comisión: artículos modificados

50 % de lo que por esta ley recibirán en 1935, de manera que la percepción será la siguiente:

PROVINCIAS	1935 Promedio	1936 95 %	1937 90 %	1938 85 %
En miles de \$ m/n.				
Mendoza. . . .	16.662	15.829	14.996	14.163
San Juan . . . .	7.552	7.174	6.797	6.419
Jujuy. . . . .	1.706	1.621	1.535	1.450
Salta . . . . .	300	285	270	255
Tucumán . . . .	5.714	5.428	5.143	4.857
Totales . . . .	31.934	30.337	28.741	27.144

PROVINCIAS	1939 80 %	1940 78 %	1941 76 %	1942 74 %
En miles de \$ m/n.				
Mendoza. . . .	13.330	12.996	12.663	12.330
San Juan . . . .	6.042	5.890	5.740	5.588
Jujuy. . . . .	1.365	1.331	1.297	1.262
Salta . . . . .	360	351	342	333
Tucumán . . . .	4.571	4.457	4.343	4.228
Totales . . . .	25.608	25.025	24.385	23.741

PROVINCIAS	1943 72 %	1944 70 %	1945 68 %	1946 66 %
En miles de \$ m/n.				
Mendoza. . . .	11.997	11.663	11.330	10.997
San Juan . . . .	5.437	5.286	5.135	4.984
Jujuy. . . . .	1.228	1.194	1.160	1.126
Salta . . . . .	324	315	306	297
Tucumán. . . . .	4.114	4.000	3.886	3.771
Totales . . . .	23.100	22.458	21.817	21.175

PROVINCIAS	1947 64 %	1948 62 %	1949 60 %	1950 58 %
En miles de \$ m/n.				
Mendoza. . . .	10.664	10.330	9.997	9.664
San Juan . . . .	4.833	4.682	4.531	4.380
Jujuy . . . . .	1.092	1.058	1.024	989
Salta . . . . .	288	279	270	261
Tucumán . . . .	3.657	3.543	3.428	3.314
Totales . . . .	20.534	19.892	19.250	18.608



## Sanción de la H. Cámara de Diputados

## Despacho de comisión: artículos modificados

PROVINCIAS	1951 50 %	1952 54 %	1953 52 %	1954 50 %
En miles de \$ m/n.				
Mendoza. . . .	9.331	8.997	8.664	8.331
San Juan. . . .	4.229	4.078	3.927	3.776
Jujuy. . . . .	955	921	887	853
Salta. . . . .	252	243	234	235
Tucumán. . . .	3.200	3.086	2.971	2.857
Totales. . . .	17.967	17.325	16.683	16.042

Art. 8º — Las provincias afectadas por la disminución dispuesta en el artículo anterior tendrán derecho a que la Nación tome a su cargo hasta su extinción, la deuda provincial actualmente existente, consolidada o que se consolide antes de 3 años, por un importe nominal cuyo servicio de interés y amortización equivalga a las cantidades que las provincias dejarán de percibir cada año en relación al inmediato anterior, por aplicación del artículo precedente.

La Nación, en cuanto no se haya obligado a lo contrario por acto expreso, en vez de efectuar por sí el servicio de deuda provincial podrá entregar a las provincias el importe del mismo para que ellas lo hagan directamente.

Procederá en esa forma obligatoriamente cuando los tenedores de títulos a quienes se haya afectado determinados recursos provinciales que desaparecen por la unificación, no acepten como deudora pura y simple a la Nación y exijan directamente de las provincias el pago de sus créditos.

El Poder Ejecutivo nacional queda facultado para convenir con las provincias el traspaso inmediato a la Nación de toda o parte de la deuda provincial, que en virtud de esta ley debe la Nación tomar a su cargo parcialmente cada año; siempre que las provincias renuncien a su favor a la parte correspondiente de los recursos que tienen a percibir en virtud de esta ley en cantidad suficiente para atender el servicio de intereses y amortizaciones dentro de la vigencia de esta ley.

Art. 9º — El Poder Ejecutivo podrá también convenir en hacerse cargo de las deudas de cualquier provincia siempre que éstas renuncien a su favor a parte de los recursos que tienen a percibir en cantidad suficiente para atender el servicio de intereses y amortización dentro de la vigencia de esta ley, y siempre que las provincias en ese caso, renuncien a contraer nuevas deudas externas o a convertir en externas las

Art. 9º — El Poder Ejecutivo podrá también convenir en hacerse cargo de las deudas de cualquier provincia siempre que éstas renuncien a su favor a parte de los recursos que tienen a percibir *de la Nación* en cantidad suficiente para atender el servicio de intereses y amortización dentro de la vigencia de esta ley, y siempre que las provincias en ese caso, renuncien a contraer nuevas deudas externas o a convertir en

## Sanción de la H. Cámara de Diputados

## Despacho de comisión: artículos modificados

deudas internas, durante el tiempo señalado en el artículo 27, salvo que lo hicieran por intermedio de la Nación o de sus instituciones de crédito. Por deudas externas se considerará a los efectos de este artículo, las que deben pagarse fuera del país o las que estuvieran liberadas en moneda extranjera o con garantía de cambio extranjero o de valor oro.

Art. 10. — El promedio de las cantidades totales que por virtud de los artículos 5º y 7º de esta ley correspondan a todas las provincias adheridas en los años 1938 y 1939, comparado con el promedio de las cantidades que la Nación haya cobrado para sí durante el mismo tiempo en concepto de impuestos internos, determinará la proporción que a partir del 1º de Enero de 1940 corresponderá a la Nación y al conjunto de las provincias del producido total de los impuestos internos nacionales.

Art. 11. — A partir del 1º de Enero de 1940 la distribución se hará a cada provincia adherida en la siguiente forma: del total que para todas resulte por la aplicación del artículo 10 se computarán en primer término, las cantidades fijadas por los artículos 3º, primera planilla, y 7º y el remanente se distribuirá en proporción a la población.

Art. 12. — El pago de los impuestos internos se hará mediante depósito de su importe por el contribuyente en la cuenta «Impuestos Internos Nacionales» que se abrirá en el Banco de la Nación Argentina, salvo cuando se trate de recibos provisorios de valores o de letras suscriptas por los contribuyentes en virtud de lo dispuesto por los artículos 16 y 18 de la ley número 3.764, los cuales deberán ser depositados por la Administración General de Impuestos Internos en el Banco de la Nación para que sean levantados por los deudores.

Carecerá de validez todo pago hecho directamente a la Administración General de Impuestos Internos.

Estos impuestos serán cargados y percibidos por el productor, fabricante o importador en el acto de salir los productos de fábrica, la aduana o depósito fiscal, siendo ellos los responsables ante el fisco en la forma que determina la ley número 3.764.

Art. 13. — Cuando un contribuyente no pague a su vencimiento la letra suscripta por impuesto, el Banco de la Nación Argentina la remitirá de inmediato a la Administración General de Impuestos Internos para su cobro judicial.

externas las deudas internas, durante el tiempo señalado en el artículo 27, salvo que lo hicieran por intermedio de la Nación o de sus instituciones de crédito. Por deudas externas se considerará, a los efectos de este artículo, las que deben pagarse fuera del país o las que estuvieran liberadas en moneda extranjera o con garantía de cambio extranjero o de valor oro.

## Sanción de la H. Cámara de Diputados

## Despacho de comisión: artículos modificados

Para su pago el contribuyente deberá hacer el depósito correspondiente en la cuenta «Impuestos Internos Nacionales» y presentar como constancia la boleta correspondiente.

Art. 14. — Las sucursales del Banco de la Nación Argentina acreditarán diariamente a la casa matriz las sumas que ingresen en la cuenta «Impuestos Internos Nacionales» y la casa matriz acreditará también diariamente hasta el 31 de Diciembre de 1939, a cada una de las provincias adheridas, la cantidad que resulte de dividir el total anual que corresponde a cada provincia por aplicación de los artículos 5º y 7º, por el número de días hábiles del año, acreditando el remanente a la Nación.

A partir del 1º de Enero de 1940, del total de la recaudación diaria se acreditará a las provincias adheridas las cantidades que les correspondiere por aplicación de los artículos 10 y 11, acreditando el remanente a la Nación.

El Banco de la Nación no cobrará remuneración de ninguna especie por los servicios que preste conforme a esta ley.

Art. 15. — El Banco de la Nación Argentina remitirá cada semana al Ministerio de Hacienda de la Nación y al de cada provincia el movimiento y estado de la cuenta «Impuestos Internos Nacionales» y cualquier informe que con referencia a la misma se le solicite.

Art. 16. — Al efectuar el reparto del producido del impuesto entre la Nación y las provincias, conforme a las disposiciones de esta ley, el Banco actuará como mandatario conjunto de la Nación y de cada una de las provincias, y no podrá por lo tanto dejar de cumplir con respecto a ninguna de ellas las obligaciones que le incumben sin orden conjunta de la Nación y de la provincia interesada.

Art. 17. — Si la renta correspondiente a una provincia no fuera acreditada puntualmente a la misma, serán responsables de la omisión o demora, el gerente bajo cuya dependencia estén las oficinas encargadas de hacer las acreditaciones o entregas, y los jefes de las mismas oficinas y cualquier funcionario superior que haya ordenado o que no se haya opuesto a esa omisión o demora. Todos ellos serán pasibles de la pena de prisión de uno a tres años e inhabilitación por cinco años, sin perjuicio de las acciones civiles y administrativas que procedan.

Los gobiernos provinciales pondrán el hecho en conocimiento del procurador fiscal federal que corresponda, enviándole todos los elemen-

Sanción de la H. Cámara de Diputados

Despacho de comisión: artículos modificados

tos de juicio, el que sin dilación formulará la denuncia correspondiente a la justicia federal.

Los gobiernos provinciales quedan facultados asimismo para promover y proseguir, sin perjuicio de la intervención fiscal, las acciones civiles o criminales pertinentes.

Las penas a que se refiere este artículo, no gozarán de los beneficios de la condena condicional y de la excarcelación bajo fianza.

Art. 18. — El derecho que esta ley acuerda a cada provincia adherida, de participar en el producido de los impuestos internos nacionales, en la cantidad y forma establecida, es correlativo de la obligación que ellas contraen, de no establecer durante toda la vigencia de esta ley, impuestos, tasas, tributos u otros gravámenes comprendidos en la misma.

Para cada provincia, el derecho a recibir las sumas que se le asigna, comienza partir del 1º de Enero de 1935, desde el primer día que entre en vigencia la ley provincial que disponga la adhesión, la que será comunicada al Poder Ejecutivo Nacional y al Banco de la Nación Argentina.

Durante el tiempo en que alguna provincia no haya estado adherida, no se le tendrá en cuenta al hacer la distribución ni tendrá derecho a reclamar posteriormente lo que hubiera podido corresponderle durante el tiempo que no estuvo adherida.

Art. 19. — La adhesión de las provincias se hará por ley que disponga:

- a) Que la provincia acepta el régimen de la unificación tal cual está dispuesto por esta ley, sin limitaciones ni reservas;
- b) Que la provincia se obliga a no establecer ni cobrar, desde su adhesión hasta la terminación de la vigencia de esta ley, impuesto, tasa, tributo u otro gravamen de los comprendidos en el régimen de la misma, reconociendo que será nula toda disposición en contrario;
- c) Que las provincias adheridas, se obligan por el término de vigencia de esta ley, a no gravar en lo sucesivo los productos alimenticios en estado natural o manufacturado;
- d) Que todas las autoridades de la provincia estarán obligadas a prestar su más

Art. 18. — El derecho que esta ley acuerda a cada provincia adherida de participar en el producido de los impuestos internos nacionales, en la cantidad y forma establecidas, es correlativo de la obligación que ellas contraen, de no establecer durante toda la vigencia de esta ley impuestos, tasas, tributos u otros gravámenes comprendidos en la misma.

Para cada provincia, el derecho a recibir las sumas que se le asigna comienza a partir del 1º de Enero de 1935, *siempre que la adhesión se realice antes del 31 del mismo mes. Si la adhesión se produjera con posterioridad a esa fecha, el derecho a recibir las sumas que se les asignen correrá desde el primer día que entre en vigencia la ley provincial que disponga la adhesión*, la que será comunicada al Poder Ejecutivo Nacional y al Banco de la Nación Argentina.

Durante el tiempo en que alguna provincia no haya estado adherida, no se le tendrá en cuenta al hacer la distribución, ni tendrá derecho a reclamar posteriormente lo que hubiera podido corresponderle durante el tiempo que no estuvo adherida.

## Sanción de la H. Cámara de Diputados

amplia colaboración para facilitar la recaudación y fiscalización de los impuestos internos nacionales;

- e) Que las provincias productoras adheridas no podrán otorgar primas que tiendan a que los productos gravados con impuestos internos nacionales, se vendan fuera de su territorio a menor precio que el corriente dentro del mismo;
- f) Que se tendrán por derogados los impuestos que crean las leyes que a continuación se mencionan para cada provincia y cualquier otro de sus mismas características, o que persiga igual o semejante objeto.

PROVINCIA	LEY	CONCEPTO
Buenos Aires	4.197	Impuesto al consumo de bebidas alcohólicas, alcoholes, cervezas, aguas minerales, fósforos, naipes y tabacos.
Santa Fe	2.286	Ley de impuestos al consumo.
" "	2.316	Modificación de la ley 2.286.
Córdoba	3.469	Ley de impuestos a los alcoholes, tabacos, naipes, cervezas, fósforos y perfumes.
Entre Ríos	2.631	Impuestos a los alcoholes y los tabacos.
" "	2.735	Modifica la ley 2.631.
" "	2.690	Impuestos a los naipes.
" "	2.783	Ampliación de la ley 2.690.
" "	2.802	Impuestos a los perfumes y artículos similares.
" "	3.009	Impuesto a las primas de seguro.
<i>Impuestos a la producción</i>		
Tucumán	—	Impuesto al azúcar:
"	—	\$ 0,01 (un centavo moneda nacional) por kilo de azúcar elaborado. (Gravamen creado por el artículo 28, letra I, de la ley de patentes, del 14 de Noviembre de 1908).
"	—	\$ 0,005 (medio centavo moneda nacional) por kilo de azúcar elaborado. (Gravamen creado por ley de presupuesto año 1912, incorporado a todos los presupuestos subsiguientes, que también rige actualmente).
"	—	\$ 0,02 (dos centavo moneda nacional) por cada kilo de azúcar elaborado. (Gravamen creado por ley del 9 de Febrero de 1933).
"	—	\$ 0,005 (medio centavo moneda nacional) por cada kilo de azúcar elaborado. (Gravamen establecido por decreto-convenio del 7 de Julio de 1934).
"	—	Impuesto a la caña:
"	—	\$ 0,15 (quince centavos moneda nacional) por cada mil kilogramos de caña recibida en los ingenios. (Gravamen creado por el artículo 28, letra P de la ley de patentes, del 14 de Noviembre de 1908).
"	—	\$ 0,05 (cinco centavos moneda nacional) por cada mil kilogramos de caña recibida en los ingenios. (Gravamen creado por la ley del 27 de Julio de 1909, modificada por la de 18 de Diciembre de 1922).
"	—	\$ 0,05 (cinco centavos moneda nacional) por cada mil kilogramos de caña molida por los ingenios. (Gravamen creado por el artículo 11 de la ley de 21 de Junio de 1928, modificado por el artículo 10 de la ley de 18 de Julio de 1932).
"	—	\$ 0,015 (un centavo y medio moneda nacional) por cada mil kilos de caña recibida en los ingenios.

## Sanción de la H. Cámara de Diputados

PROVINCIA	LEY	CONCEPTO
		(Gravamen creado en virtud del artículo 13, de la ley de 5 de Julio de 1927).
		Impuesto al alcohol:
Tucumán	—	\$ 0.05 (cinco centavos moneda nacional) por litro fabricado (Gravamen creado por el artículo 4º) de la ley de presupuesto de 1930, vigente en la actual.
		<i>Impuestos al consumo</i>
"	—	(Tabacos), del 31 de Julio de 1915. (Modificada por la de 26 de Octubre de 1915 y por el artículo 7º de la ley de presupuesto de 1930).
"	—	(Bebidas alcohólicas), del 4 de Julio de 1916.
"	—	(Vinos), del 16 de Septiembre de 1916. (Modificada por la de 5 de Enero de 1923).
"	—	(Alcohol), del 8 de Enero de 1923.
"	—	(Cerveza), del 16 de Enero de 1923.
"	—	(Joyas y artículos de fantasía), del 14 de Junio de 1933.
"	—	(Armas y accesorios), del 14 de Junio de 1933.
"	—	(Naipes), del 14 de Junio de 1933.
"	—	(Bebidas sin alcohol y sidra), del 14 de Junio de 1933.
"	—	(Artículos de tocador y perfumes), del 14 de Junio de 1933.
"	—	(Fósforos), del 14 de Junio de 1933.
"	—	(Cascos vacíos), del 14 de Junio de 1933.
"	—	(Pólizas y primas de seguros), del 14 de Junio de 1933.
Salta	1.070, 2.881 y 2.893	Patente al azúcar elaborada.
"	954	Impuesto al consumo de azúcar.
"	119	Vinos.
"	30	Ley de impuestos al consumo de tabacos, cervezas y aguas de mesa, vinos de mesa, bebidas alcohólicas, naipes, alcoholes y coca.
"	35	Impuesto a los perfumes.
"	36	Fósforos.
S. del Estero	594	Impuesto al consumo de tabaco, cigarros y cigarrillos.
"	775, 805, 994 y 1.250	Modificaciones a la ley 594.
"	596	Bebidas alcohólicas.
"	773, 934, 992, 1.192 y 1.251	Modificaciones a la ley 596.
"	617	Impuesto a las cervezas, bebidas sin alcohol y naipes.
"	934, 1.193	Modificaciones a la ley 617.
"	1.204	Impuesto al azúcar.
Mendoza	866	Impuesto a la uva de vinificar exportada.
"	886	Impuesto a la uva cosechada.
"	1.000	Impuesto a la uva de mesa.
"	1.006	Modificatoria de la ley 866 y ampliatoria de la ley número 1.000.
"	992	Adicional a la uva cosechada (Aporte a la Caja Obrera)
"	701	Exención a los vinos exportados.
"	866 y 933	Impuesto al vino elaborado.
"	935	Impuesto de emergencia al vino.
"	992	Adicional al vino (Aporte a la Caja Obrera).
"	584	Impuesto a los alcoholes.
"	917	Acidos enológicos.
"	1.058	Modificación a la ley 992.
"	1.066	Patente a las destilerías de alcohol vínico.
"	1.067	Aprovechamiento integral de la materia prima y derivación de vinos; exenciones de impuestos: facilidades para elaboración y pago de impuestos.
"	1.068	Fomento del consumo del vino y de la uva.
"	1.072	Fraccionamiento y consumo local del vino.
"	1.073	Cooperativas vitivinícolas, agrícolas y frutícolas.
"	917	Acidos minerales.

## Sanción de la H. Cámara de Diputados

PROVINCIA	LEY	CONCEPTO
Mendoza	625	Análisis del vino.
"	776	Tabacos, cigarros y cigarrillos.
"	903	Bebidas alcohólicas.
"	944	Cervezas.
Jujuy	29, 30 y 529	Impuestos al azúcar y alcohol.
"	1.090	Impuesto a la caña.
"	886	Impuesto al consumo de bebidas, tabacos, coca y naipes.
"	946	Adicional a la coca.
"	969	Modificación a la ley 886.
"	1.100	Modificación a las leyes 886 y 969.
"	946	Impuesto al azúcar de consumo.
Corrientes	547	Tabacos, naipes, bebidas alcohólicas, fósforos y perfumes.
San Luis	1.201	Impuesto a los tabacos.
"	1.202	Impuesto a los vinos, bebidas alcohólicas y alconoes.
"	1.329	Modificación de la ley anterior.
"	1.088 y 1.103	Fósforos.
"	1.015	Naipes.
"	1.013	Perfumes.
San Juan	7-1-919 N° 91, 216 y 224	Impuestos al vino.
"	90, 208 y 438	Impuestos a la uva.
"	439	Uva, bodega del Estado.
"	439	Vino, bodega del Estado.
"	460	Capacidad vacía en bodega.
"	Decretos 9-3-934; 14-3-934	Referente a impuestos al vino y a la uva.
"	505	Impuesto a la uva para vinificar fuera de la provincia.
"	27, 92, 101 y 212	Impuestos al consumo.
"	562 y 569	Impuestos al vino y uva.
La Rioja	536	Impuesto a la cerveza.
"	465	Impuestos a bebidas, tabacos, cigarros, cigarrillos, fósforos y perfumes.
"	478	Modifica la anterior.
"	536	Substituye la ley 478.
"	562	Modifica a los artículos 181, 182, 185, 189 y 190 de la ley 536. (Impuestos a los cigarros, tabacos y cigarrillos).
"	589	Modifica la ley 536 en lo que respecta al vino.
Catamarca	2 de Enero de 1929	Ley de impuestos al consumo.

Art. 20. — En razón de la unificación de los impuestos al consumo, todas las provincias adheridas se obligan por todo el término de esta ley, a no gravar y a que sus municipalidades, distritos, partidos, concejos u otras autoridades municipales o subdivisiones administrativas, sean o no autónomas, no graven al consumo, comercialización, almacenamiento, venta o expendio de artículos o productos que soporten impuestos internos nacionales.

Las patentes, derechos de inspección y de control, impuesto al capital en giro y demás gravámenes que respondan a igual o semejante objeto, no podrán establecerse ni aplicarse en forma específica a los artículos o productos gravados con impuestos internos nacionales, ni a las personas que comercien con ellos, salvo las excepciones del artículo 26; ni podrá establecerse sobre ellos impuestos o gravámenes que no siendo específicamente establecidos para esas personas o cosas re-

Sanción de la H. Cámara de Diputados

Despacho de comisión: artículos modificados

sulten desproporcionados con el gravamen que se aplique a fabricantes o comerciantes de otros artículos de consumo semejante en relación al capital o giro comercial de los mismos.

Art. 21. — Las provincias productoras de artículos o productos gravados con impuesto interno nacional, a más de las obligaciones mencionadas en el artículo anterior, al adherirse al régimen de la unificación se obligan a no gravar, y a que sus municipalidades, distritos, partidos, concejos u otras autoridades municipales o subdivisiones administrativas sean o no autónomas, no graven dichos artículos o productos, o su producción, fabricación, almacenamiento, expendio o transporte ni las materias primas y subproductos que se utilicen en la producción o fabricación de los artículos mencionados. Tampoco podrán hacerlo en concepto de fiscalización, de control o de comercialización de los mismos con impuestos al capital en giro, patentes, licencias u otros gravámenes establecidos específicamente sobre ellos; o que no siendo específicos para esas personas o cosas, resulten desproporcionados con el gravamen aplicado a fabricantes o comerciantes de otros artículos o productos semejantes, en relación al capital o giro comercial de los mismos.

La contribución territorial y otras contribuciones directas aplicables a los campos que produzcan materias primas esenciales para la elaboración o fabricación de los productos o subproductos a que se refiere el primer apartado de este artículo y aquellos que pesan sobre los edificios, fábricas, instalaciones, donde se elaboren los productos mencionados, no podrán tener tasas en proporciones mayores que las aplicadas a cualquier otro inmueble dedicado a otro ramo de producción.

Art. 22. — Al mismo tiempo que dispongan la adhesión al sistema de esta ley, las provincias tomarán las medidas necesarias para que sus municipios, concejos, partidos, distritos y cualquier otra autoridad municipal o subdivisión administrativa, sean o no autónomas, cesen de percibir gravámenes que las provincias se comprometen a no imponer ni percibir. Exceptúase a lo dispuesto en el párrafo anterior a las clasificaciones de patentes, licencias y tasas que las municipalidades hayan tenido vigentes durante el año 1934, las que podrán continuar aplicando en el futuro a los actuales o nuevos contribuyentes.

Art. 23. — Si alguna de las provincias adheridas sancionaran y pretendieran percibir algún tributo de los que se ha comprometido a no establecer ni cobrar, podrá la Nación o cualquiera de



Sanción de la H. Cámara de Diputados

Despacho de comisión: artículos modificados

las provincias adheridas, sin necesidad de demostrar un perjuicio particular resultante de esa medida, pedir que se declare nula la disposición por la cual se pretende cobrar ese tributo o que cese de percibir la participación en los impuestos nacionales mientras cobre el impuesto provincial impugnado, todo ello sin perjuicio del derecho que pudiera corresponder a los perjudicados por el impuesto provincial para contestar su validez o reclamar la reparación de sus consecuencias.

Art. 24. — Demandada una provincia por otra o por la Nación en razón de haber establecido impuestos contrarios a lo dispuesto por esta ley y a las obligaciones contraídas por virtud de la adhesión al sistema de unificación, la Suprema Corte podrá, desde el primer momento y sin trámite alguno, suspender el cobro del impuesto de la ley provincial atacada o disponer que el Banco de la Nación suspenda a esa provincia la acreditación de los fondos que esta misma ley le asigna.

La suspensión de la entrega de fondos deberá ordenarse si la ley provincial que crea el tributo contrario al sistema de la unificación se ha hecho ostensiblemente en contra de lo que se establece en los artículos 21 y 22.

Art. 25. — Los vinos genuinos de producción nacional o importados pagarán como impuesto interno, por litro, la tasa de \$ 0,05 m/n.

El azúcar de producción nacional o importado pagará como impuesto interno \$ 0,02 m/n. por kilo, debiendo este impuesto computarse a los efectos de la fijación del derecho adicional del artículo 2º del decreto de fecha 6 de Febrero de 1931.

El impuesto nacional se percibirá sobre los azúcares elaborados después del 1º de Enero de 1935.

Las provincias productoras de azúcar que adhieran a esta ley, podrán seguir aplicando sus actuales leyes impositivas sobre los azúcares en existencia al 1º de Enero de 1935, debiendo debitarse a las provincias la suma que cobraren después de dicha fecha. El Banco de la Nación dividirá el total debitado en tantas cuotas diarias iguales como las que correspondan a un período de doce meses, y las irá restando de lo que deba acreditar a la respectiva provincia, a partir de la fecha de su adhesión, entregando su importe al gobierno nacional.

El impuesto interno nacional al azúcar será abonado a la salida de fábrica o aduana, en letras a 90 días de plazo.

Art. 25. — Los vinos genuinos de producción nacional o importados pagarán como impuesto interno, por litro, la tasa de \$ 0,05 m/n.

El azúcar de producción nacional o importado pagará como impuesto interno \$ 0,02 m/n. por kilo, debiendo este impuesto computarse a los efectos de la fijación del derecho adicional del artículo 2º del decreto de fecha 6 de Febrero de 1931.

El impuesto nacional se percibirá sobre los azúcares elaborados después del 1º de Enero de 1935.

Las provincias productoras de azúcar que adhieran a esta ley, podrán seguir aplicando sus actuales leyes impositivas sobre los azúcares en existencia al 1º de Enero de 1935, debiendo debitarse a las provincias la suma que cobrasen después de dicha fecha. El Banco de la Nación dividirá el total debitado en tantas cuotas diarias iguales como las que correspondan a un período de doce meses, y las irá restando de lo que deba acreditar a la respectiva provincia, a partir de la fecha de su adhesión, entregando su importe al gobierno nacional.

El impuesto interno nacional al azúcar será abonado a la salida de fábrica o aduana, en letras a 90 días de plazo.

## Sanción de la H. Cámara de Diputados

## Despacho de comisión: artículos modificados

La cerveza genuina elaborada exclusivamente con malta proveniente de cebada argentina, pagará \$ 0,05 m/n. por litro.

La cerveza genuina elaborada con malta proveniente de cebada extranjera o con mezclas de maltas provenientes de cebada argentina y extranjera, cualesquiera sean las proporciones en que ambas se empleen, pagará \$ 0,08 m/n. por litro.

Estos impuestos quedan consolidados en las cantidades expresadas durante el término de diez años y regirán desde el 1º de Enero de 1935; aplicándose a los mismos las disposiciones de las leyes números 3.764, 4.363 y 11.252 que sean pertinentes.

Art. 26. — El impuesto interno nacional a la nafta queda excluido del régimen de distribución de la presente ley.

Las provincias adheridas mantienen el derecho de aplicar gravámenes al petróleo, como también ellas y sus municipalidades, patentes y licencias especiales al comercio de bebidas alcohólicas.

Mientras el Congreso no dicte leyes de carácter general con el mismo propósito, las provincias mantienen asimismo el derecho que les asista a regular con propósitos económicos y sociales la producción, expendio o venta de cualquier producto dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales y a imponer gravámenes que hagan efectivas sus disposiciones a los que las contravengan o excedan los límites señalados. Los fondos que por esa causa se recauden ingresarán a la cuenta «Impuestos Internos Nacionales».

Medidas de ese orden no podrán aplicarse por una provincia en forma que incida sobre la venta o expendio de artículos o productos provenientes de otras provincias o territorios en forma distinta que para los artículos o productos de la propia provincia o para los que salen de la provincia en forma distinta a los que se consumen en ella.

Art. 27. — La duración de esta ley se fija en veinte años, en lo que respecta a las disposiciones establecidas en los artículos precedentes. A la expiración de dicho término quedará prorrogada tácitamente su vigencia por el término de diez años más, siempre que ninguna de las partes haya denunciado el acuerdo a lo menos con dos años de anticipación.

La cerveza genuina elaborada exclusivamente con malta proveniente de cebada argentina, pagará \$ 0,05 m/n. por litro.

La cerveza genuina elaborada con malta proveniente de cebada extranjera o con mezclas de maltas provenientes de cebada argentina y extranjera, cualesquiera sean las proporciones en que ambas se empleen, pagará \$ 0,08 m/n. por litro.

*Estos impuestos regirán desde el 1º de Enero de 1935 y podrán ser reducidos pero no elevados, durante el término de diez años, salvo para el vino en lo que respecta a los impuestos sancionados por la ley de creación de la Junta Reguladora de Vinos, aplicándose a los mismos las disposiciones de las leyes números 3.764, 4.363 y 11.252 que sean pertinentes.*

## Sanción de la H. Cámara de Diputados

## Despacho de comisión: artículos modificados

Art. 28. — La Nación podrá convenir con cada provincia en acordarle los recursos que les corresponden por los años 1935 a 1939, inclusive, en distinta forma que la establecida en los artículos 5º y 7º, siempre que las cuotas anuales no sean mayores que el promedio de lo que les corresponda recibir durante los años mencionados, ni su conjunto exceda a la totalidad de las cantidades que le atribuyen los artículos 5º y 7º.

Esos convenios no se tendrán en cuenta a los efectos del artículo 10 que se cumplirá como si hubiera mantenido íntegramente lo dispuesto en los artículos 5º y 7º.

Art. 29. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

A. R. FERREIRA.  
L. Zavalla Carbó.

**Sr. Sánchez Sorondo.** — Pido la palabra.

La comisión ha resuelto retirar su despacho y aconsejar al Senado, por las razones que he de dar con la brevedad posible, la aprobación del proyecto venido en revisión de la Cámara de Diputados. Los motivos que fundan esta determinación son exclusivamente circunstanciales. Deseamos que este proyecto sea cuanto antes convertido en ley. Por otra parte, las modificaciones proyectadas por la comisión sólo tienden a aclarar algunos conceptos sin alterar sus partes fundamentales.

No creo exagerar si expreso que el propósito de unificar los impuestos internos al consumo por un acuerdo entre la Nación y las provincias, es una de las iniciativas más trascendentales traídas al estudio del Congreso. Por su objeto, por sus formas solemnes, por sus consecuencias fiscales, económicas, políticas e institucionales.

El proyecto en discusión, a pesar de algunas deficiencias que he de anotar en el curso del debate, responde a esos conceptos fundamentales. Procura la regulación de los mal llamados impuestos internos, así calificados con esa imprecisión que es propia, entre otras, de nuestro léxico fiscal, estableciendo su fijación y su percepción por la Nación, abrogando la diversidad de regímenes, de jurisdicciones y de tarifas, y limpiando para el futuro, a este respecto, la cartera judicial de la Nación y de las provincias. Bastaría esto solo para que lo destacásemos como un gran paso dado hacia la simplificación, la justicia, la justeza y la claridad de nuestro sistema rentístico. Aborda con amplitud el pro-

cedimiento aconsejado por la Constitución y no observado hasta ahora en la práctica de nuestro federalismo, de los tratados entre las provincias, con anuencia del Congreso, para resolver conflictos de intereses creados por el ejercicio discutido de facultades ya excluyentes o ya concurrentes. Plantea las bases de una posible unificación de la deuda pública de las provincias; destruye una serie de cortapisas que traban el desenvolvimiento del comercio y de la industria; reparte con relativa equidad el producido de sus rentas; aspira a realizar en parte la unidad fiscal y económica, y, por fin, abre horizontes indefinidos a la remodelación institucional. Perdónese me este neologismo, que conceptúo necesario según el sabio consejo de Littré, y ha de permitírseme que me detenga un poco en este aspecto para mí fundamental de la cuestión.

Los acontecimientos políticos que en todo el mundo buscan dirigir la marcha de la sociedad, suscitando corrientes encontradas de opinión, han conmovido y han desalojado a veces los viejos principios del liberalismo y del individualismo en todos los campos de la actividad colectiva.

La posición de las ideas ha variado, y esta variación obliga a los hombres de pensamiento y a los hombres de gobierno especialmente, a meditar sobre sus consecuencias para no ser arrastrados por ellas, y encontrar la fórmula de avenimiento entre el pasado, que se encastilla en la tradición y el porvenir que se nos presenta, como nunca, preñado de novedades revolucionarias. Si encontramos esa fórmula de

avenimiento, habremos salvado el trance difícil del presente. Si no la encontramos, deberemos enfrentar la lucha, ocupando cada cual el sitio que le señalen su ideología, sus sentimientos y su concepto del deber.

No podemos equivocarnos sobre el momento que vivimos. Estamos en una tregua. Sepamos aprovechar de ella para asentar sobre bases firmes la construcción futura y darle la necesaria solidez para que resista.

Respecto del proyecto en discusión, estimo que a pesar de sus deficiencias, que he de destacar en tres capítulos, primero, porque no es un plan ni parte de un plan; segundo, porque involucra incidentalmente cuestiones fundamentales, como la de la deuda pública provincial, que debería ser objeto de un régimen especial; tercero, por la rigidez de sus cifras, estimo, repito, que este proyecto consulta con relativo acierto la fórmula de avenimiento a que antes me referí.

Desde luego, no podrán negarse sus consecuencias específicas: contra el desorden, introduce el orden; contra la arbitrariedad y la exacción inmotivada, la norma técnica; contra la diversidad de criterios y de jurisdicciones, la unidad de jurisdicción y de criterio; contra la dispersión, la centralización. Y quien dice orden, norma, unidad y centralización, dice autoridad y jerarquía, es decir, paz, autoridad. Y orden, autoridad, jerarquía y paz, es gobierno, y gobierno es lo que necesita indispensablemente la sociedad para poder desenvolverse en progreso y armonía.

Para ello, ha sido necesario insuflar en la interpretación del texto constitucional, lo que podríamos llamar el espíritu de los tiempos nuevos.

Esta ley vivifica, sin alterarla, la letra de la Carta Fundamental; esta ley se inclina ante la exigencia de la vida; esta ley armoniza con los hechos, generadores del derecho y de un punto de vista exclusivamente personal, digo que armoniza con el espíritu de nuestra historia, que se aparta cada vez más, a medida que se alegan esas causas determinantes de la transacción federal, que tuvo en su hora, es cierto la virtud de realizar la unión nacional, pero que va perdiendo, cual un palimpsesto, su fuerza primitiva con la usura de la realidad, para llevarnos a un tipo de gobierno propio, sui géneris, inspirado en nuestra tradición, en nuestra raza, en nuestra lengua y en nuestras costumbres.

He querido destacar esta característica del proyecto, que lo domina, para que sepamos a

qué nos comprometemos al votarlo. Esta ley puede ser calificada como una especie de ley constituyente, realizada en los hechos sólo después de que la aprueben, al adherirse, las legislaturas de provincia. Así ella se presenta con un carácter casi inenmorable en sus fundamentos y en sus prescripciones, porque para alterarla será necesario el acuerdo de las catorce provincias de la Nación.

Esta ley, por fin, cierra el cielo de la influencia preponderante de la Nación sobre las provincias, dentro del espíritu de nuestra Constitución, influencia expresada en múltiples leyes; en la propia ley de impuestos internos, las leyes 4.714 y 5.315, las leyes de obras de salubridad, la ley de defensa agrícola, la ley de policía sanitaria y la ley de vitalidad, para no mencionar sino las más importantes.

También quiero decir que el esfuerzo que ha demandado su preparación está de acuerdo con su importancia. Desde hace largos años, los técnicos y los sufrientes por la situación legislativa actual, se han venido preocupando de buscarle su remedio.

Podríamos señalar su punto de arranque en el año 1907, cuando el señor Rufino Varela, administrador de Impuestos Internos de la Nación, se encontró con el problema de la doble imposición y propuso la unificación de los impuestos, atribuyendo el 60 % a la Nación y el 40 % a las provincias. Después otro administrador de Impuestos Internos, el doctor José María Ahumada, uno de los hombres que más han estudiado este asunto, en 1916, reeditando el libro en 1922, también se ocupó de la materia, propiciando soluciones análogas. Ministros como el doctor Víctor Molina; diputados desde 1910, como el doctor Luis Leguizamón, por Entre Ríos, como el doctor Miguel Laurenceña, por Entre Ríos; como los diputados Luis Agote, por Buenos Aires; Gerónimo del Barco, Félix I. Garzón, por Córdoba, y últimamente por el doctor Adrián C. Escobar. Publicistas y estudiosos como los doctores Montes de Oca, González Calderón, Salvador Oría, López Varela, Dell'Oro Maini y Sojo y hasta entidades como la Confederación del Comercio y de la Industria, que en el año 1927 en un dictamen expedido por la comisión especial nombrada, de la que yo tuve el honor de formar parte y que solicito del Senado inserte en su Diario de Sesiones (1) porque es uno de los antecedentes más preciosos y directos de la ley que

(1) Véase pág. 152.

discutimos, aconsejaron, *mutatis mutando*, la solución que hoy se preconiza.

Por eso, señor presidente, podemos decir que esta es una obra colectiva y que nadie puede decir a título personal que es su obra. Como las catedrales que levantaba el arte del Medioevo, debe quedar en nuestra historia legislativa sin nombre de autor. Pero esto no me inhibe de felicitar, como lo hago, al señor ministro de Hacienda, que con su talento reconocido, su laboriosidad y su inteligente dinamismo, ha recogido las iniciativas presentadas en la actual época constitucional por el doctor Adrián Escobar en 1933 y por mí hace algunos meses en este cuerpo, les ha dado otra forma y ha visto triunfar el pensamiento. Y así como de lejos, lo primero que se ve es la flecha de las catedrales, es posible que en el andar de los tiempos sólo se vea la acción del señor ministro de Hacienda, conquistando el aplauso de sus conciudadanos.

El proyecto adolece de algunas deficiencias, pero antes de entrar al fondo del asunto, tengo que confesarme ante el Honorable Senado; sólo así podría tener la suficiente libertad para seguir en el uso de la palabra.

Yo no debía ser el miembro informante de este asunto; pero nos encontramos en la comisión en una situación especial: el presidente de la misma, por razones respetables que nos expuso, no deseaba informar; el doctor Bruchmann está ausente por enfermedad; el doctor Laurencena, es opositor a este proyecto, y tengo la esperanza de oírlo, en un elocuente discurso; el doctor Campos tiene también salvedades que hacer; el único pues, que podía en esas circunstancias, tomar sobre sí esta enojosa carga de informar un proyecto con cuyos términos no está completamente de acuerdo, era yo, y con esa franqueza que uso en mis funciones públicas, dije esto mismo al señor miembro informante y al señor ministro. De modo, pues, que el Senado advertirá cuál es mi posición.

Yo soy autor de un proyecto de unificación de impuestos internos, y, en realidad, la situación que a mí me correspondía era la de pedirle a la comisión que despachara esos proyectos que yo presenté, que sigo creyendo buenos y no el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo y sancionado por la Cámara de Diputados. Pero, como soy hombre político, como la colaboración con el gobierno no puede ser sino el resultado de una transacción, como no creo tener el monopolio de la verdad; como estimo que si no se sancionase esta ley

en el presente período, corremos el riesgo de no sancionarla y como pienso que tener esta ley es mejor, mucho mejor que no tener ninguna, acepté el encargo de informarla y le doy mi discurso, mi firma y mi voto.

Decía, señor presidente, que para mí uno de los defectos de esta ley es que no formaba parte de un plan y que no era orgánica. No sé si más adelante el Poder Ejecutivo nos enviará algunos otros proyectos complementarios de este sistema; como senador, hubiera preferido tenerlos a la vista para despachar este asunto. Pero, como no puedo hablar sino de lo que conozco, me encuentro con que es, incompleto y fragmentario. Confieso que cuando se trata de contemplar los intereses económicos, fiscales y financieros del país, tengo una debilidad por los planes. Los métodos circunstanciales y especiales me hacen el efecto de anestésicos o de cataplasmas. Un plan es un todo orgánico, bueno o malo, pero es algo que se compenetra, algo que se conecta, algo que pretende o aspira a remediar la dificultad tocándola en todos los lados en que debe ser tocada, algo que puede ofrecer en todos sus detalles una especie de compensación para realizar en el instante preciso el objetivo que se desea.

Por mi parte, he sido fiel siempre a estas ideas. Cuando hace 12 años, se discutía en el Congreso de la Nación la grave crisis ganadera, presenté un sistema de leyes que obedecían a un pensamiento central. De aquel debate, estrangulado por razones que no es del caso recordar, salieron leyes deficientes y fragmentarias; la ley de peso vivo, la mala ley del control del comercio de carnes, el frigorífico municipal, porque el Congreso no tuvo la decisión de abordar el problema en su fondo, tal cual había sido planteado por mí: el problema de los frigoríficos. Y hoy este problema revienta y próximamente hemos de tener otra vez que tomar el camino que entonces no quiso el Congreso emprender.

Cuando en 1933, se agudizó la crisis económica en el país, también tuve ocasión de presentar un plan metódico y completo; de ese plan solo salieron las leyes incompletas y fragmentarias sobre suspensión de los remates por sesenta días y de moratoria hipotecaria; y acaso me halaga el pensamiento de que algunos de los fundamentos que diera en aquella oportunidad, sirvieron después para adoptar algunas oportunas medidas de gobierno por los ministros de Hacienda y de Agricultura.

Y hoy me encuentro exactamente en la misma situación. Hace algunos meses con una

tenacidad que no desconsuela el sueño del archivo con que terminan generalmente todas mis iniciativas, presenté un plan de reformas al régimen tributario, del que formaba parte este proyecto de unificación de impuestos internos, pero que jugaba un papel distinto del que se le hace jugar ahora. Ese plan consistía fundamentalmente en la supresión de los impuestos de contribuciones y patentes en la Capital Federal y territorios nacionales; supresión del impuesto a las transacciones; invitación a las provincias para unificar los impuestos internos sobre bases que el mismo proyecto establecía; invitación a las provincias para unificar los impuestos a la transmisión gratuita de bienes; invitación a las provincias para suprimir a su vez los impuestos territoriales y de patentes, y substituir todos los impuestos así suprimidos por un pequeño recargo en la cuota del impuesto a los réditos, impuesto a los réditos que quizás cuando llegue el caso podré demostrar que debe ser la base principal de los recursos de la Nación, y que si hoy produce diez, bien administrado puede dar perfectamente veinte.

Pero, de esta situación salió, como siempre, — porque todas las iniciativas, como los libros, tienen sus destinos —, un solo proyecto: el de unificación de impuestos internos que me cabe el honor de informar.

Objeto también en ese proyecto, que plantea circunstancialmente uno de los grandes problemas que tuve en vista al presentar mi plan, y que debiera ser su consecuencia inmediata: la unificación de toda la deuda pública argentina. El tema me parece que es suficientemente interesante como para provocar el estudio especial de una ley o sistema de leyes. Tenemos, en cifras redondas, 5.000.000.000 de deuda pública entre la Nación, las provincias y los municipios. Podríamos aspirar, si se encargara la Nación del regenteo de esta deuda, unificarla a un tipo de interés y de amortización que haría bajar, probablemente, los servicios de esa deuda en más de 100.000.000 de pesos anuales, aliviando a la producción en una disminución equivalente en impuestos.

La idea está apuntada en los artículos 8º y 9º de la ley que discutimos, pero no está desenvuelta en la forma eficaz que yo aspiraría a ver; y no sé si me engaño, pero creo que allá, en el pensamiento recóndito del señor ministro de Hacienda ha de flotar algo parecido; él debe tener sus vistas para realizar este pensamiento que ha de ser sin disputa uno de los grandes timbres de honor de su ministerio.

Y para terminar quiero manifestar que formulo mis reservas acerca del criterio rígido con que esta ley va a ser aplicada. Y, al respecto, dejo la palabra al señor ministro, quién ha de llevar al espíritu de los señores senadores la convicción que a mí me falta, para decir que esto es lo mejor que debe votarse.

Como ven los señores senadores, ninguna de las objeciones que he formulado impiden la sanción de la ley, aunque pudiera existir un sistema o una ley mejor; pero específicamente, el proyecto, tal cual ha sido despachado por la Cámara de Diputados y tal cual lo aconseja la comisión, significa sin discusión un progreso en el régimen del sistema impositivo.

El mecanismo del proyecto es aparentemente complicado; digo aparentemente, porque en realidad no lo es. Toma como base, una vez establecida la centralización para fijar y percibir el impuesto, el promedio del rendimiento de los últimos cinco años, y de allí parte para hacer la disminución correspondiente; disminuye de acuerdo con el régimen establecido en los artículos 2º a 7º el porcentaje, para volverlo a aumentar teniendo como base el criterio de la población, y prohíbe a las provincias el ejercicio de las facultades impositivas, que aun de una manera indirecta pueden servir para volver al sistema que hoy rige. Podría decirse quizás que el mal de la doble imposición no reside en el hecho mismo de la doble imposición; podría decirse que el mal reside en la gravación. Y que desde este punto de vista el proyecto de unificación presentado a la discusión del Honorable Senado no satisface completamente los anhelos de los que han bregado por la existencia de un solo impuesto.

Esto me determina a decir dos palabras respecto de su financiación.

En realidad el proyecto toma, — y no he de leer los rubros para no fatigar la atención del Honorable Senado, pero tengo en mi carpeta todos los elementos de juicio por si alguno de los señores senadores deseara conocerlos —, en realidad, decía, el proyecto toma la suma de la imposición de orden nacional y provincial, hace algunas variantes en más y en menos, algunos artículos están recargados y otros notablemente desgravados, y el resultado final es un déficit de alrededor de 14.000.000 de pesos, déficit que el señor ministro de Hacienda se propone cubrir con otras leyes y con otros ingresos.

Y quizás, señor presidente, ha llegado el caso de decir en esta primera ley de impuestos que discute el Senado, cuál es el pensamiento de

los señores senadores que creen deber votar este asunto.

Por eso he de terminar esta breve exposición, diciéndole al señor ministro de Hacienda que desde mi punto de vista no debe el Gobierno preocuparse tanto del equilibrio del presupuesto.

Es posible que exprese algunas herejías financieras; pero el equilibrio del presupuesto aun cuando teóricamente es una cosa laudable, es como la salud perfecta, algo muy difícil de alcanzar.

Un país que tiene sus finanzas sanas y su presupuesto equilibrado está en el mejor de los mundos; pero la experiencia nos enseña que no hay ningún país que tenga un presupuesto equilibrado, y, si lo hay, es una excepción que confirma la regla. No hay ningún país, ninguna finanza pública que goce de salud perfecta, y no me parece política acertada en el momento que corre, buscar el equilibrio del presupuesto o sea la salud perfecta gravando fuentes de producción que pueden periclitarse a consecuencia de ese mismo gravamen. No se busca la salud perfecta atacando el corazón, pulmones, hígado, etcétera.

¿Qué nos importa el equilibrio del presupuesto cuando la producción, la industria, el comercio protestan por las imposiciones a que se los tiene sometidos y demuestran que no pueden vivir con ellas!

Es preferible tener un déficit de 30, 40, 50 ó 100.000.000 y desgravar la producción en 30, 40, 50 ó 100.000.000, porque esa clase de déficit puede financiarse perfectamente, y al señor ministro de Hacienda le sobran aptitudes y decisión para encontrar el remedio.

Por mi parte, señor presidente, adelanto que no he de votar ningún impuesto nuevo, no porque crea lo que generalmente se expresa en los manifiestos o en las exposiciones y peticiones que los interesados presentan a los poderes públicos, sino por una razón de otro tipo, que la conceptúo más fundamental: el impuesto tiene su repercusión psicológica, y así como el señor ministro de Hacienda se ve injustamente atacado, — yo soy el primero en reconocerlo, por publicaciones que engañan al pueblo— haciéndole aparecer como propiciando cargas impositivas que exceden de las cargas actuales, yo le digo que eso viene del criterio variable que se tiene en materia de impuestos contrariando reglas fundamentales de los economistas que pregonan, ante todo, su estabilidad.

No se puede cambiar todos los días de imposición, porque eso trae intranquilidad, como

resultado lógico, a la producción y al comercio. Es preferible dar la sensación de fijeza, aun cuando esta fijeza cueste algunos millones al Estado, que provocar esta situación de verdadera incertidumbre.

Así pues, no me asustaría que el señor ministro nos trajese un presupuesto con un déficit de algunos millones a cambio de que nos librara de las nuevas imposiciones como el impuesto a las ventas, cuya justicia técnica no quiero discutir, y como el impuesto a las herencias, cuya justicia social discuto en la forma que aparece enviado por el Poder Ejecutivo. Prefiero, decía, que nos traiga un presupuesto con algunos millones de déficit y que tranquilice al país diciéndole que no habrá más impuestos y si es posible, que el gobierno de la Nación propenderá a la reducción de los presentes. (*¡Muy bien! en las bancas*).

**Sr. Laurencena.** — Pido la palabra.

Este proyecto, al que se atribuye tan trascendentales consecuencias, entre ellas la de constituir una transformación fundamental del régimen impositivo nacional, podría ser efectivamente un gran proyecto, con mayor trascendencia aún de la que se pretende, si hubiera sido concebido y ejecutado en un momento más oportuno, consultando mejor la realidad de los fenómenos políticos, económicos, financieros, institucionales y sociales del país en el presente y en el futuro, y si se hubiera puesto en el asunto más amplitud de miras. Desgraciadamente, se ha empequeñecido el asunto hasta reducirlo a las proporciones de una cuestión de política meramente fiscal, y por añadidura, de mala política fiscal, porque apenas se profundiza un poco el análisis de sus disposiciones, se ve claramente que los mismos propósitos fundamentales que sus autores y sostenedores le atribuyen, no se cumplen, se cumplen sólo en apariencia o se cumplen sólo a medias.

Antes de entrar al fondo de la cuestión, debo hacer dos aclaraciones previas. Yo no combato este proyecto por razones de orden constitucional, ni tampoco por una oposición de principio al sistema de la unificación de los impuestos internos. No invoco razones de orden constitucional, porque creo que, ante las decisiones de la Suprema Corte de la Nación, conocidas por todos los señores senadores, que constituyen una interpretación prestigiosa y autorizada de la Constitución, sobre las facultades concurrentes de la Nación y de las provincias, en materia de impuestos a la producción y al consumo, la discusión constitucional no tiene

sino un valor doctrinario. La verdad legal o legalizada por la jurisprudencia, en el momento, es que ambas jurisdicciones tienen y ejercen esa facultad, de donde deriva como una consecuencia natural la facultad de reglar, de convenir contractualmente su ejercicio, para prevenir los conflictos impositivos a que puede dar origen. Algunos miembros del sector político a que pertenezco, oponen a este proyecto reparos constitucionales, que yo respeto. No debe verse en esto una contradicción de conceptos fundamentales: nuestro partido no ha hecho de la cuestión constitucional, en este asunto, una cuestión de fondo. La cuestión de fondo es, para nosotros, la defensa de la autonomía de las provincias en su amplio concepto de autonomía política, económica, financiera e institucional, y la defensa de los intereses legítimos de las provincias. En estos puntos, tenemos una absoluta coincidencia.

Pero yo creo que un proyecto de unificación de los impuestos internos al consumo, en principio, no comprometería la autonomía ni los intereses de las provincias, si fuera planteado, como he dicho al principio, en un momento oportuno, contemplando la realidad en sus diversas fases, con amplio espíritu de solidaridad nacional y si, además, fuera después cumplido con lealtad, con probidad, sin fines políticos.

Por otra parte, para mí, más que un problema constitucional teórico o doctrinario sobre facultades impositivas y su ejercicio, existe en este asunto un problema práctico, económico y financiero, que constituye la base misma de la autonomía provincial en todas sus manifestaciones, y que no se resuelve con un deslinde más o menos preciso de las facultades impositivas de la Nación y de las provincias. Cualquiera sea ese deslinde impositivo, es decir, las fuentes y formas de imposición que se atribuyan a la Nación y a las provincias, dentro de nuestros textos constitucionales, lo indudable es que la llave del régimen impositivo nacional queda en manos de la Nación, del gobierno federal, que puede no sólo levantar o arruinar una actividad o una industria determinada, sino engrandecer o perjudicar a una provincia o a todas las provincias.

Basta observar el momento en que vivimos y el panorama del país. Tenemos el tesoro federal bien nutrido, tan nutrido, que ha sido posible en plena crisis mantener un presupuesto de lujo, con una ficción de economías, frente a las provincias en plena bancarrota, con déficit enormes, que no han tenido recursos ni para atender las más apremiantes y graves necesidades públicas. Es que las fuentes impositi-

vas de las provincias están agotadas por el exceso impositivo de la Nación, que en plena crisis ideó e implantó impuestos que representaban más de doscientos millones de pesos al año.

Frente a este espectáculo realmente desconcertante, no es posible mantener posiciones puramente doctrinarias, porque la realidad de los hechos demuestra que la solución del problema no radica en que las provincias conserven o no las actuales facultades impositivas, sino — y esta es la cuestión de fondo, — en que la Nación adopte normas de moderación en los gastos y en consecuencia en los impuestos con que debe cubrirlos.

La capacidad tributaria de un país, o mejor dicho, de los habitantes de un país, es limitada. Tiene un límite, impuesto por su capacidad de producción, y a este respecto no podemos hacernos ilusiones excesivas en cuanto a nuestra población.

Mientras la Nación mantenga impuestos que exceden a ochenta pesos por habitante — no importa saber en qué forma y con qué impuestos los obtiene — es indudable que las provincias no podrán establecer impuestos suficientemente productivos para cubrir sus presupuestos de gastos.

Ninguna provincia excede en este momento de una recaudación de cincuenta pesos por habitante; muchas, como Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, oscilan entre veinte y treinta pesos por habitante, y otras no alcanzan a veinte pesos.

Esta es la verdad sobre las exageraciones tributarias y la avaricia fiscal que se imputa a las provincias, cada vez que ellas intentan aumentar sus magros e improductivos impuestos locales.

Los impuestos internos al consumo forman sólo un capítulo, dentro del régimen financiero nacional, y su unificación, por sí sola, no constituiría un obstáculo a reformas beneficiosas que lo mejoraran, si se realizara con el propósito serio de rectificar los errores y corregir los defectos del sistema vigente.

Por eso, yo no combato la unificación en sí misma, pues creo firmemente que, bien realizada y unida a otras medidas que contemplaran con amplitud el problema económico-financiero nacional, podría ser un útil instrumento para el logro de los fines que todos debemos proponernos.

He dicho al principio que este proyecto no es oportuno. En efecto, estamos en un momento de intensa depresión económica; estamos todavía en plena crisis, y no sabemos la evolución que las circunstancias pueden producir o



imponer, en término más o menos breve, de acuerdo con las transformaciones que la economía nacional experimente, al salir de la depresión, y este solo hecho bastaría para comprobar la inoportunidad de esta iniciativa.

Una reforma impositiva como esta, que, aunque parcial, puede tener consecuencias graves para las finanzas y para la economía de las provincias, no ha debido encararse sino en momentos de estabilidad económico-financiera que permitiera examinar bien todos los factores en juego y aun fundar previsiones sobre la evolución futura de las tributaciones. Y tanto más necesaria es la estabilidad, cuando, como ocurre en este caso, se fija a las provincias cantidades fijas e invariables durante cinco años, y se establecen las bases para la distribución ulterior, después de los cinco años iniciales, cuando es imposible ninguna previsión relativamente cierta sobre los factores que actuarán en ese momento.

Tal es la nebulosa que, a causa de las circunstancias actuales, rodea los resultados numéricos de este proyecto, que mientras el señor ministro de Hacienda cree que él perjudica a la Nación, yo sostengo, a la inversa, que ese proyecto es perjudicial para las provincias. Ninguno de los dos podemos probar numéricamente nuestra aseveración, porque faltan elementos de juicio y de cálculo. Pero, de todos modos, cualquiera que sea la verdad, tanto el perjuicio de la Nación como el de las provincias, constituye una demostración de que el proyecto es malo, sin bases suficientemente sólidas.

Un convenio financiero de esta naturaleza entre la Nación y las provincias, no puede hacerse sobre bases tan inciertas, que lo conviertan en un contrato aleatorio, del que pueden derivarse ganancias para una parte y pérdidas para la otra. Eso no es un contrato, es un juego. Eso es embarcar a los gobiernos argentinos en una especulación.

Yo sé que el señor ministro de Hacienda, a pesar de que no se le escapan estas objeciones fundamentales, piensa que el momento es oportuno. Desde su punto de vista tiene razón. Es precisamente la crisis económica, la depresión general, la bancarrota de las finanzas provinciales, lo que permite al gobierno de la Nación imponer a las provincias este proyecto, que, bajo la apariencia halagadora de beneficios inmediatos, encierra una verdadera extorsión moral. Sabe el señor ministro de Hacienda que ninguna provincia, aunque vea y palpe los errores y las perniciosas consecuen-

cias de la unificación proyectada, podrá dejar de adherir, para evitar la intolerable reagración impositiva que su población sufriría por la coexistencia de los impuestos nacionales aumentados y los impuestos locales.

Al iniciar esta exposición, dije también que este plan podría haber sido excelente si se hubiera contemplado la realidad de los fenómenos políticos, institucionales, económicos y financieros del país. Desgraciadamente, el autor de este plan se ha detenido en su análisis en la superficie de esos fenómenos, ha reducido el campo de observación al terreno financiero exclusivamente, y a través de un miraje falso, ha confundido los errores de los gobernantes y de los políticos, con movimientos naturales de las fuerzas vitales del país, y el resultado, lógicamente, tenía que ser este plan fiscal, cuyas mayores, y desde luego, más malas consecuencias, se producirán seguramente fuera de las previsiones y de las intenciones de muchos que lo aceptan sin suficiente meditación y estudio.

Este proyecto encierra una intención centralista — lo ha declarado bastante claramente el señor miembro informante de la comisión — más que en el orden financiero fiscal, por sus consecuencias fuera del orden financiero y, sobre todo, por los problemas de orden institucional y económico que no se abordan, que se dejan pendientes, y cuya solución conveniente se dificultará más en el futuro. He ahí la falla fundamental de este proyecto.

Si se hubiera profundizado el análisis, se hubieran advertido dos cosas: la primera, que existe una cantidad de problemas institucionales, económicos y sociales que no pueden resolverse por un régimen de centralización, porque, precisamente, el absurdo centralismo del excesivo poder federal mal empleado, es el que los ha creado, los ha complicado y los ha colocado en términos casi insolubles; y se hubiera advertido, en segundo término, que lo que interesaba, lo necesario para disipar errores pasados y encauzar al país por una senda más racional, era abordar todos esos problemas en conjunto, buscando soluciones armónicas, de tal manera que la nueva ordenación financiera, fuera la consecuencia del reajuste y ordenación de los factores económicos y de las facultades y funciones que la Nación y las provincias ejercen, dentro de sus respectivas jurisdicciones, con un concepto de moderada descentralización funcional, tal como sabiamente la ha establecido la Constitución nacional.

Yo me explico que muchos no puedan ver el fondo de nuestra realidad política, econó-

mica y social y que otros no hayan querido verlo, bajo la influencia de algunas ideas que están de actualidad, que están de moda, y que hallan, por desgracia, en nuestros antecedentes y en nuestro ambiente, muchos puntos de apoyo.

La idea centralista, que para muchos se confunde con el concepto de gobierno fuerte, de acción enérgica, más o menos dictatorial, es una de esas ideas que están de moda.

Con motivo de este debate, hemos oído repetir con frecuencia la bonita frase de la «unidad económica nacional», frase de relumbrón, pero sin sentido, en el concepto que se la emplea; hemos oído hablar sin ambages, sin eufemismos, de la centralización política, económica y financiera del país. Y algún orador, dejándose llevar de la cadencia del párrafo armonioso, nos ha pedido que abandonemos esta ficción de federalismo para abrazar el régimen unitario.

Es exacto, señor presidente, que la legislación nacional, dictada durante los últimos 25 o 30 años, es de tendencia centralista y las instituciones que han surgido como consecuencia de esa legislación, están también inspiradas en un concepto de centralización. Y ello es explicable, porque durante este período ha predominado la legislación social, bajo la influencia de las grandes masas obreras de Buenos Aires y de los partidos metropolitanos. En el orden financiero ha ocurrido lo mismo, como consecuencia de la mayor capacidad del gobierno federal y de la debilidad de los erarios provinciales. Pero, fuera de estas dos manifestaciones, no hay ninguna otra actividad que se acuse un proceso natural de centralización en el país. Al contrario, las corrientes naturales invencibles, que los errores legislativos y el centralismo, podrán retardar, pero no detener en su evolución, son manifiestamente descentralizadoras. No es necesario ahondar mucho el análisis para demostrar la exactitud de esta aseveración y encontrar sus causas. Toda la economía pública y privada de la República Argentina se basa en las industrias rurales, en la producción agrícola ganadera, la que, por naturaleza, por imposición misma de los hechos, debe crear una economía descentralizada. No puede haber absurdo más grande ni concepción más irracional que la de querer crear y organizar una economía centralizada, cuando las bases de esa economía se apoyan en la producción agropecuaria.

Si a la naturaleza misma de la economía rural, opuesta a la centralización, agregamos los

factores concurrentes de la enorme extensión territorial y de la múltiple diversidad de climas, de condiciones agrológicas, étnicas, etcétera, que determinan una gran variedad de producción, y de características locales, concluiremos de explicarnos que la vida nacional, sólo puede desenvolverse ampliamente dentro de un régimen descentralizado y que las tentativas de centralización, son como una armadura de hierro, que impiden el desarrollo normal y vigoroso del organismo nacional. Por haber desconocido esta verdad elemental y primaria es que la legislación centralista del Congreso argentino y las instituciones económicas creadas por el Estado, no han tenido eficacia y mantienen en pie todos los grandes problemas nacionales, especialmente los de carácter económico.

Podría hacer la demostración, pasando en revista todas las manifestaciones de la actividad nacional, pero para no prolongar excesivamente esta exposición, me limitaré a examinar el problema del crédito.

Nadie ignora que en la vida moderna el crédito es la savia vital de la industria y el comercio, mejor dicho, de toda la economía de una nación. Más de una vez, y sobre todo en momentos difíciles, la economía, la estabilidad de una industria, hasta de un país, dependen del funcionamiento de un buen crédito. Y bien, el mecanismo creditario del país, —me refiero a las instituciones oficiales y privadas— está organizado en la misma forma, con las mismas características y con iguales fines que en el año 1890, cuando el comercio era casi la única actividad económica nacional y la producción agropecuaria estaba reducida a los llamados frutos del país: cueros, lanas, crines, etcétera. En 40 años, hemos desarrollado una industria colosal, hemos mejorado la técnica y las condiciones de la producción, exportándose más de mil millones de pesos en productos agropecuarios, que constituyen hoy la base fundamental de nuestra economía, y sin embargo, el sistema creditario sigue organizado para el comercio, está al servicio del comercio, que ocupa el segundo plano, y no tenemos siquiera un incipiente crédito agrícola.

Pero no sólo no hemos organizado el crédito agrícola sino que, y esto es aún más alarmante, hay quienes sostienen todavía, inducidos por esta idea centralista errónea, que basta crear una sección especial del Banco de la Nación Argentina, sin apereibirse de que toda su enorme potencialidad financiera, como organismo de crédito comercial, es incapaz de reunir las con-

diciones necesarias para organizar un buen crédito agrícola.

El crédito agrícola es una institución típica y demostrativa de la forma cómo se deben y pueden resolver los problemas rurales, que son, en definitiva, los problemas fundamentales de nuestra economía, y por esta razón voy a detenerme en este punto.

Cualquiera que conozca medianamente las condiciones en que se desenvuelven nuestras industrias rurales, sabe que el crédito agrícola sólo puede ser bien administrado, en la cuantía justamente necesaria y en el momento oportuno, por pequeños organismos locales, establecidos en los mismos centros rurales, y manejados en lo posible por directores y consejos vecinales, conocedores de la zona y conocedores personalmente de los clientes productores. Es decir, por un sistema descentralizado. Fuera de esta condición esencial, no habrá nunca un buen crédito agrícola.

Los pequeños organismos locales federados, formarían cajas regionales, y estas cajas regionales unidas, en una caja nacional, crearían un organismo central que respaldaría financieramente a aquéllos, coordinando su acción y la aplicación de sus recursos.

Quería llegar a este punto, señor presidente.

He aquí, se dirá, que la organización descentralizada conduce por fuerza de los hechos a la centralización. Es necesario no confundir conceptos distintos.

En el orden económico, como en la generalidad de las actividades sociales, es conveniente y a veces indispensable la unión, la coordinación de esfuerzos, la cooperación activa de medios y recursos, lo que con frecuencia, como en el caso del crédito agrícola, conduce a una útil concentración financiera. Es el caso del ejemplo clásico de las varillas de mimbre delgadas y débiles, que, unidas, forman un maso resistente. Es una conjunción de fuerzas, como resultante de aplicárselas en una misma dirección; pero en la cual los organismos y las fuerzas no pierden su capacidad funcional, conservan su individualidad, su espíritu de iniciativa y su acción propia dentro de la esfera en que se desenvuelven.

Esto no es centralización, o por lo menos no es ese el concepto y el espíritu con que se persigue la centralización económica, financiera e institucional por los autores y sostenedores de este proyecto. Su pensamiento está revelado en esa frase, que ya he calificado antes: la «unidad económica nacional».

La «unión» económica nacional —no la «unidad» — ya existe en la Argentina y sería posi-

ble una mayor coordinación económica, sería posible una mayor armonía de intereses, sería posible una mayor suma y una menor dispersión de fuerzas, bajo la dirección inteligente del gobierno federal, y quizás sólo por la influencia de su gravitación moral bien inspirada. Pero la aspiración de realizar la «unidad económica», contra las corrientes naturales de las fuerzas económicas, —que son siempre más poderosas que las leyes y la voluntad de los gobernantes— como base de la unidad política institucional y financiera, no sólo es un absurdo, sino que, por desgracia, intentada desde el gobierno y con la colaboración del Congreso, con leyes como ésta que tratamos, esa tendencia continuará constituyendo una traba formidable al normal desarrollo del país.

Más adelante tendré que volver sobre este punto para concluir la demostración de que este proyecto de unificación de impuestos a algunos consumos, proyecto reducido a un carácter meramente fiscal, no ha contemplado a fondo los fenómenos económicos, financieros, institucionales y sociales del país, que quedan totalmente en pie, los cuales han debido ser abordados en conjunto, para colocarlos en términos de buena solución.

Entrando al estudio del proyecto en sí mismo, lo primero que ocurre preguntarse es si, aun en su esfera reducida de naturaleza meramente financiera fiscal, cumple las finalidades que de él podrían esperarse, o siquiera las que sus autores le atribuyen.

Una reforma fiscal, cualquiera que sea, puede perseguir varias finalidades y ésta, que no es insignificante, por cierto, no debía dejar de tenerlas. Veamos esas finalidades, y cómo se cumplen.

El primer y más importante objetivo confesado de este proyecto es «suprimir la superposición de impuestos nacionales y provinciales, evitando así los inconvenientes que causa, a algunas industrias y a parte del comercio, la intervención de dos autoridades fiscales distintas.»

De ahí se pretende derivar una consecuencia favorable para el desarrollo y prosperidad de esas industrias.

Digamos ante todo, que el propósito de suprimir la superposición impositiva, no puede ser un propósito muy serio en el actual gobierno nacional, que durante su existencia de menos de tres años, por inspiración propia o como heredero del Gobierno Provisional, ha agobiado al país con impuestos que, en su enorme mayoría, son una superposición lisa y llana de

otros impuestos nacionales o provinciales que ya existían, y que en estos mismos momentos proyecta otros, como el de las ventas y el de las herencias, que, de sancionarse, se superpondrían a otros impuestos vigentes. Descartemos, pues, la seriedad de intenciones en el propósito de suprimir la superposición impositiva, a menos que admitamos que en el concepto del gobierno nacional, la superposición es mala cuando la producen las provincias y es buena cuando la crea la Nación.

Es exacto, en cambio, que esta unificación evitará inconvenientes a algunas industrias y a parte del comercio, — no al consumidor que en este punto nada tiene que ver con el impuesto. Pero, de las industrias que yo conozco, puedo afirmar que los inconvenientes que desaparecerán con la unificación, se reducen a la atención y control del doble estampillado, pero que eso no influirá ni poco ni mucho en la prosperidad de las industrias.

Durante el último tiempo he tenido ocasión de estudiar la industria tabacalera en su doble fase de la producción de tabacos en el país y de su manufactura. Y puedo afirmar al señor ministro que, a pesar de su buena voluntad, que me complace en reconocer, para regularizar y hacer más justo el régimen fiscal, no de ahora sino desde hace muchos años, la rémora de la industria tabacalera nacional, que impide su progreso, y lo que es más grave aun, que favorece la formación de los grandes monopolios, y la ruina de la pequeña industria, es el gobierno de la Nación por la acción de la Administración de Impuestos Internos, a la cual el espíritu fiscal de los ministros de Hacienda, ha permitido que lleve el control fiscal a extremos realmente intolerables.

Si los señores senadores quieren tener una impresión viva y real, de todo lo que es capaz de hacer la Administración nacional, cuando se mueve con un propósito fiscal, para arruinar la producción y la industria, yo los invito a que dediquen unos pocos días a estudiar las condiciones en que la industria tabacalera se desenvuelve, frente a las reglamentaciones y a los procedimientos de la Administración de los Impuestos Internos de la Nación.

Desde luego, no es un misterio que la producción de tabaco en algunas regiones del país se redujo a proporciones mínimas, casi sin valor económico, por las exigencias reglamentarias de Impuestos Internos, que los pequeños cultivadores no podían cumplir. Lo mismo ha pasado antes y sigue pasando actualmente con los manufactureros: si los criterios absurdos

y contradictorios de la actual administración continúan, las pequeñas industrias tendrán que desaparecer para dejar el campo libre a las grandes fábricas.

Y hago notar, de paso, a los señores senadores, que en las provincias no existen sino pequeñas manufacturas, y que las grandes empresas están en Buenos Aires. Los señores senadores juzgarán las consecuencias y verán cómo al amparo de las leyes del Congreso, aunque contra su intención, se continúa operando este proceso de centralización que perjudica a las provincias.

Yo no sé si este proceso de concentración industrial en Buenos Aires, está en los planes del gobierno y del señor ministro de Hacienda, pero los señores senadores pueden tener la certeza de que ese es el resultado inevitable de la acción de la administración de los impuestos internos nacionales, si no se le pone coto con mano enérgica y voluntad firme.

Desde el punto de vista de la industria, pues, la unificación producirá sólo pequeñas ventajas que no gravitarán mayormente en su prosperidad, que está comprometida y en peligro, no por la doble imposición sino por la acción de la administración de los impuestos internos nacionales.

La segunda finalidad de este proyecto, según se ha expresado, es impedir que algunas provincias, para cubrir sus presupuestos, establezcan impuestos excesivos sobre artículos de producción local que gravitan sobre el consumo de la población de la Capital Federal y de las otras provincias. Se refiere especialmente a las provincias productoras de vino y azúcar.

El impuesto a la producción, a mi juicio, no solamente es legal, según lo ha declarado la jurisprudencia, sino legítimo y justo. Esas provincias lo que hacen es, como todas las otras, gravar la riqueza creada en su territorio. Lo ilegítimo e inadmisible es el exceso, el abuso impositivo adoptado al amparo de la protección aduanera nacional, y ese exceso podría ser impedido por la Nación fácilmente, por el juego de los impuestos aduaneros, sin necesidad de llegar a la unificación.

¿Pero se cumple este propósito? Es evidente que no. Salvo una reducción parcial en cuanto al vino, lo que se hace es trasladar el impuesto de las provincias a la Nación para entregarlo a las mismas provincias, es decir, que el consumo nacional continuará costearlo, como hasta ahora, los presupuestos de Mendoza, San Juan, Tucumán, Salta y Jujuy.

El proyecto mantiene, pues, el sistema que sus mismos autores califican de injusto, con una circunstancia curiosa más: que la cantidad a entregarse a aquellas provincias va disminuyendo y el impuesto no, de manera que debe ir a engrosar al Tesoro nacional, aumentado por el natural acrecentamiento del consumo. Y esto va a crear una situación curiosa, un caso único: que la Nación tendrá un impuesto al consumo del vino y azúcar, amparado en la protección aduanera que la misma Nación ha establecido. En otras palabras, esto significa que la protección aduanera no protegerá a la industria sino a los mismos impuestos nacionales al consumo. En resumen, esta segunda finalidad no se cumple porque la ley está hecha en forma que la Nación hará lo mismo que reprocha a las provincias.

El tercer objetivo del proyecto es hacer cesar la política proteccionista, adoptada por algunas provincias, mediante derechos diferenciales, establecidos en favor de la producción local.

Es indudable que existen actualmente leyes provinciales, cada vez más numerosas y diversas que adoptan una forma de protección inaceptable, dentro de las normas de coordinación económica y de solidaridad nacional que ninguna provincia debe olvidar. Todo lo que se haga para cortar de raíz este grave mal, está bien hecho y es plausible.

Pero hay formas de protección, de estímulo, de fomento de las industrias que son perfectamente lícitas, legítimas y justas, y que esta ley va a impedir. Jujuy y Entre Ríos, por ejemplo, al no gravar la producción vinícola local y Corrientes la producción tabacalera, ejercitan una forma de protección indirecta, que es inobjetable y que desaparecerá con esta ley.

Es indudable que una provincia puede tener condiciones naturales excelentes para la creación de determinada industria, pero que en su iniciación requiera un tratamiento especial de amparo, de protección, y es lamentable que esta ley impida algunas de las formas más eficaces de ejercitar esa protección.

La doble imposición, señor presidente, tiene sin disputa, no he de negarlo, notorios y serios inconvenientes; pero no puede negarse tampoco, sin cerrar los ojos obstinadamente a la verdad, que tiene ventajas muy dignas de consideración, especialmente en el aspecto económico y social. Se ha imputado, como un cargo a las provincias, que no utilizan ya los

impuestos al consumo con fines únicamente fiscales, sino que los hacen actuar como instrumento de influencia económica y social. ¿Pero esto es un mal? Yo creo, por el contrario, que es una de las ventajas de las facultades impositivas ejercitadas por las provincias. Es un mal, cuando se recurre al procedimiento de los derechos diferenciales y de las barreras interprovinciales, lo mismo se utilice para ello el impuesto, como los pretextos sanitarios o reglamentaciones de tránsito; pero es lícito e inobjetable cuando se procede sin afectar los principios de solidaridad nacional.

La Nación utiliza también el impuesto con fines económicos y sociales. Pero el país es muy extenso; las distintas regiones tienen condiciones económicas y características sociales muy diferentes, tienen problemas diversos que la legislación nacional, uniforme para toda la Nación, no puede contemplar. He ahí el rol propio de la legislación provincial, a la que no puede quitársele el instrumento impositivo. La igualdad ante lo desigual, conduce directamente a la injusticia.

En el mensaje con que el Poder Ejecutivo remitió este proyecto, se insinuó y después lo ha afirmado categóricamente el señor ministro, que esta ley tendrá por efecto reducir la masa de las imposiciones nacionales, desgranando los consumos populares. Tengo serias y fundadas dudas sobre la exactitud de esta afirmación.

Por este proyecto, se rebajará el impuesto al vino, en conjunto, según cálculo que admito, no obstante que pagará la producción de Jujuy, Entre Ríos y Río Negro, que actualmente no tiene impuesto a la producción. El señor ministro calcula esta reducción en 10.000.000 de pesos. Admito el cálculo, pero conviene dejar constancia de que es el único impuesto que se reducirá.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Quince millones: 10 en vinos y 4,9 en uva.

**Sr. Sánchez Sorondo.** — El señor senador olvida que en la provincia de Entre Ríos, donde el vino no está gravado especialmente por la provincia, el consumidor paga el gravamen nacional y el gravamen de las otras provincias, que es superior al gravamen que proyecta el Poder Ejecutivo.

**Sr. Laurencena.** — Por eso reconozco que en materia de vinos hay una reducción. Yo creía que el señor ministro había calculado 10.000.000, pero acaba de manifestar que son 15. Para el caso es lo mismo.

El impuesto al tabaco, cigarros y cigarillos, se aumenta por el proyecto en una pro-

porción que excede a los actuales impuestos nacionales y provinciales sumados. Se aumenta igualmente el impuesto a los fósforos, que muy pocas provincias gravaban; y lo mismo el impuesto a las cervezas, a los alcoholes y bebidas alcohólicas, a los neumáticos para automóviles y se crea el impuesto nacional al azúcar, que gravará a la producción de provincias que no tenían el impuesto. Con un agregado digno de mención: que la población de la Capital Federal, que no tenía ninguno de esos impuestos, con carácter local, soportará todos los aumentos. No es difícil que sólo el consumo de la Capital Federal, con estos aumentos, equilibre la disminución que el señor ministro de Hacienda calcula en los impuestos al vino y al azúcar.

Pero aun admitiendo que haya una reducción en el conjunto de los impuestos, ¿puede invocarse ese hecho como un propósito formal de aliviar al contribuyente nacional, cuando al mismo tiempo se proyectan otras leyes impositivas como el impuesto a la exportación y a las herencias, y la transformación del de las transacciones por el impuesto a las ventas, en forma que representará un mayor rendimiento?

En el conjunto, el plan financiero del Poder Ejecutivo se reduciría, pues, a disminuir el impuesto al vino, para buscar la compensación de su producido en otros impuestos que gravitarán directa o indirectamente sobre otras producciones y consumos más dignos de estímulo.

Recapitemos, señor presidente. Si esta ley sólo suprime la superposición impositiva en una parte mínima y en el preciso momento en que se proyecta mantener y crear otras superposiciones tan graves y perturbadoras de la economía general como la que se suprime; si esta ley no constituirá una forma de estimular y fomentar las industrias nacionales, porque fortalece la Administración de Impuestos Internos nacionales, cuyos procedimientos constituyen una traba formidable a su prosperidad y amplio desarrollo, especialmente en el interior; si esta ley no realiza el propósito anunciado de evitar que las provincias productoras de algunos artículos continúen engrosando sus erarios a costa del consumo nacional; si esta ley para evitar el mal de la guerra económica entre las provincias, que pudo conseguirse por otros medios, les quita, a la vez, un instrumento útil, lícito y justo de fomento y protección de sus industrias nacientes, que puede significar la consolidación de su economía local; y por sobre todo, si este plan por su tendencia centralista, introduce un nuevo factor de perturbación en la economía nacional, que por su

naturaleza es y debe ser descentralizada, en principio, sin excluir la coordinación, la vinculación armónica, la concurrencia de esfuerzos ¿cuál es el saldo que arroja este proyecto?

A mi juicio, el saldo es francamente negativo, porque las pequeñas ventajas que puede producir, no compensan ni aproximadamente, los daños y los inconvenientes que su adopción causará.

Pero quedan por examinar todavía algunos de los objetivos que este proyecto pudo y debió tener en cuenta, si se hubiera formulado con más amplitud de miras.

Debió ser una de sus finalidades la de perfeccionar el régimen impositivo nacional, principalmente en el sentido de disminuir los impuestos al consumo, que gravitan más onerosamente sobre los menos pudientes. Ya he dicho hasta dónde y cómo, tan limitadamente, se realiza esta finalidad.

Otro objetivo que pudo tener este plan es el de resolver la mala situación de las finanzas provinciales, provocada en gran parte por el defectuoso régimen fiscal nacional, implantado desde hace muchos años, agravado últimamente por la crisis, y además por la enorme carga de nuevos impuestos establecidos por la Nación, que han agotado la capacidad tributaria del país. No diré que, en este sentido, este proyecto de unificación y el plan en conjunto, no hacen nada. Una afirmación tan extrema, no sería exacta, especialmente en lo que respecta a los dos o tres primeros años. El plan del Poder Ejecutivo suministra a las finanzas provinciales un calmante, de esos que se recetan en pequeñas dosis, con cuentagotas, para que el exceso no haga daño.

Por el proyecto de unificación que discutimos, se asigna una participación a las provincias, calculada sobre el promedio de la propia recaudación durante los últimos 5 años. Y como en este período hay sólo dos años de recaudación normal y 3 que comprenden los de la depresión máxima, provocada por la crisis, el promedio es inferior al de un rendimiento normal.

Esta participación básica de las provincias, se aumenta anualmente, durante un quinquenio, en el 10 o/o. Pero hay que aclarar bien: el aumento es 10 o/o de la parte asignada a las provincias, lo que en cifras absolutas representa \$ 3.700.000, y en cifras relativas, el 2,17 por ciento de la recaudación total de los impuestos unificados. Ya ven los señores senadores cómo la generosidad de la Nación, de que ha hecho alarde reiterado el señor ministro, perte-

nece al sistema homeopático: ¡3.700.000, el 2,17 % de aumento anual, a distribuir entre las 14 provincias!

En el proyecto de impuesto a los réditos y en el a las ventas que ha despachado la Cámara de Diputados, se asigna a las provincias, esta vez unidas a la Capital Federal, el 17,5 o/o de su producido.

Como se ve, en estos impuestos se reserva el papel del lobo y deja a las provincias y a la Capital Federal las migajas del festín.

Este plan, repito, debía tener como objetivo principal la solución de las dificultades financieras de las provincias, en primer lugar, porque la Nación tiene también los mismos deberes de solidaridad, que invoca cuando exige sacrificios a las provincias, y en segundo término, porque esta nueva ordenación financiera cercana, limita las facultades de iniciativa de las provincias en varias materias, precisamente, en las materias más aptas para obtener rápidamente el equilibrio financiero, en momentos de dificultades, como son los impuestos al consumo y a la renta.

Los impuestos que quedan a las provincias, como es notorio, carecen de elasticidad y no poseen aptitud de expansión. El aumento de rendimiento de los impuestos directos es siempre de gran lentitud y sigue a la distancia a los momentos de expansión económica.

Ante estos hechos, es indudable que el plan de unificación ha debido contemplar con más amplitud el propósito de dar a las finanzas provinciales la flexibilidad y la capacidad de expansión que sus fuentes impositivas propias no pueden darle.

Este es un punto importante, porque este plan se adopta en circunstancias de extrema depresión económica, — ya lo he dicho — al que, por lógica natural y casi fatal de las cosas, debe seguir más o menos brevemente, un período de resurgimiento económico que exigirá a las provincias, indefectiblemente una mayor atención y perfeccionamiento de los servicios públicos. Es seguro que cuando llegue ese momento, las provincias no podrán responder a la perentoria exigencia pública de mejorar la atención de los servicios a su cargo, estrechadas en el círculo de hierro de este régimen impositivo, rígido y mezquino.

¿Se resignarán las provincias a soportar estoicamente las penurias de esta nueva situación?

Ha debido atenderse preferentemente a la

situación financiera de las provincias por otras razones.

Es notorio que el régimen financiero nacional se vincula íntimamente a una serie de problemas institucionales de la mayor trascendencia. Paralelamente con la absorción financiera de la Nación, el gobierno federal ha realizado avances continuos y cada vez mayores sobre las funciones y facultades que corresponden a las provincias, produciendo una verdadera absorción institucional.

No hay casi una manifestación de la vida local en que la Nación no haya puesto la mano. ¿Hay alguna razón que justifique estos avances del poder federal? ¿Son ellos necesarios? ¿Son siquiera convenientes?

En realidad, la intromisión federal en la vida local de las provincias se ha realizado con un solo fundamento: la incapacidad o insuficiencia financiera de las provincias, y esto demuestra que la cuestión, en el fondo, se reduce pura y exclusivamente a un problema financiero fiscal. Si las provincias hubieran tenido capacidad suficiente, y la Nación, a su vez, hubiera tenido la capacidad necesaria para el cumplimiento de sus propias funciones y no más, el avance federal no se hubiera producido. Era, pues, una cuestión de mero ordenamiento de los recursos públicos. Y a la larga, se ha creado un círculo vicioso. La mayor capacidad financiera de la Nación la indujo a asumir algunos servicios y funciones locales de las provincias, y después, para poder costear esos servicios, ha continuado absorbiendo y agotando las fuentes impositivas de las provincias. El resultado es que la Nación continúa aumentando su capacidad financiera y con ella su capacidad de acción, a costa del debilitamiento y de la capacidad de acción de las provincias. En definitiva, la Nación ejerce un tutelaje tomando rentas provinciales para costear servicios locales, como si los gobiernos de las provincias fueran menores de edad, incapaces de administrar sus propios intereses.

—Ocupa la Presidencia el presidente provisorio del Senado, doctor Robustiano Patrón Costas.

Las consecuencias no se reducen sólo al trastorno institucional, sino que repercuten sobre el orden económico: la absorción financiera ha creado en el gobierno federal una tendencia centralista, que se refleja sobre la mayor parte de las instituciones por él creadas, inclusive en las de carácter económico. El Banco de la Nación Argentina, por ejemplo, para tomar la

institución más típicamente económica, es un caso palmario de la tendencia y de las consecuencias centralistas de la acción oficial.

Según el último balance, los depósitos de particulares en las sucursales, es decir, fuera de la Capital, en las provincias y territorios nacionales, eran de 592.000.000 en cifras redondas, y los préstamos acordados en las mismas, importaban 471.000.000. En la casa central y agencias de la Capital Federal, los depósitos ascendían a 591.000.000, casi igual que en las provincias, y los préstamos fueron de 573 millones de pesos. Están excluidas de estas cifras las operaciones del gobierno federal y la Cámara Compensadora. Vale decir, señor presidente, que a igualdad de depósitos, el Banco de la Nación presta cien millones más en la Capital federal, que en las provincias y territorios nacionales. ¡He ahí una comprobación evidente de la tendencia centralista de la más grande organización económica oficial!

Pero este tratamiento preferencial no sólo se exterioriza en el monto de las operaciones, sino en la forma de las mismas. Así, mientras en las sucursales de provincias sólo se acordaron 25.000.000 en forma de adelantos en cuenta corriente, en la Capital Federal se acordaron 114.000.000 de pesos en la misma forma. Como es sabido, esta forma de crédito es de condiciones privilegiadas.

Esta no es una situación de un año, de un momento determinado. Es una situación permanente e invariable de muchos años, revelada por todos los balances.

Podrá pensarse que esto obedece a la mejor situación económica de la Capital que permite inversiones más seguras. Sería un error. Porque el mismo balance que vengo analizando expresa que los deudores en gestión, en las sucursales, alcanzaban a 14.000.000 de pesos, rubro que en la Capital Federal llegaba a 44.000.000.

Estas cifras no demuestran, por cierto, que las inversiones en la Capital Federal sean más seguras que en las provincias.

La demostración que he hecho con el balance del Banco de la Nación podría hacerse con el del Banco Hipotecario Nacional y con todas las instituciones del Estado nacional, de carácter o simplemente de influencia económica.

Sólo deseo agregar una cosa, señor presidente. Este proceso de absorción y de centralización financiera e institucional, y la tendencia concordante de los organismos económicos del Estado no han podido, a pesar de todo, y no podrán constituir una economía nacional centralizada, porque no podrán torcer, destruir, las corrientes naturales de la economía agropecua-

ria, que es y debe ser por esencia descentralizada.

Pero esto nos indica, señor presidente, que aquella tendencia financiera, y sus consecuencias institucionales y económicas, como las organizaciones que ella ha creado, son malas, son inadecuadas, son contrarias a los verdaderos intereses del país.

En la Argentina, señor presidente, no sólo no es posible encontrar un interés en pugna con el de la economía rural, si no que no es posible que exista ningún interés que no esté supeditado a los intereses agropecuarios. Todas las naciones del mundo, aún las de más portentoso desarrollo industrial, en que la producción rural forma una parte mínima de su volumen general de producción, tienen que amoldar su política económica general, monetaria, arancelaria, a los intereses especiales de las industrias rurales. Estamos viéndolo todos los días.

Y nosotros, en la situación inversa, cuando nuestra producción agropecuaria alimenta el 70 % de nuestro comercio interno y el 95 % de nuestra exportación, nos complacemos en mantener y fortalecer una política que le es contraria.

No habrá dialéctica capaz de destruir esta verdad incontestable: que una economía basada casi exclusivamente en las industrias rurales, es esencialmente una economía descentralizada y exige instituciones con igual característica.

Y bien, señores senadores, si es la absorción financiera federal la que ha conducido al centralismo institucional, y ambas, a adoptar instituciones de la misma tendencia, creándose así fuerzas contrarias al libre y amplio desenvolvimiento de las fuerzas vitales del país, lo que aconseja el buen juicio es rectificar esa orientación general, y encauzar la legislación y las instituciones por los cauces naturales, señalados por nuestras condiciones económicas propias.

Lo cierto es que este proyecto no se inspira en ese pensamiento y que su intención centralista será de perniciosas consecuencias para el progreso nacional.

Por estas razones, voy a votar en contra del proyecto en discusión.

Sr. Eguiguren. — Pido la palabra.

Entro a este debate convencido de que la exposición formulada por mi compañero de representación y las palabras que he de exponer de inmediato no han de variar en un ápice lo que ya está resuelto de antemano.



No es ésta, por cierto, una posición halagadora, pero no son halagos ni satisfacciones personales los que guían nuestros actos; es el cumplimiento estricto del deber en defensa de los intereses públicos.

Por eso no he de desertar, ni he de renunciar a convicciones profundamente arraigadas, que ya las he manifestado en este recinto en reiteradas oportunidades.

Estoy hoy donde estaba ayer.

Era el 30 de Septiembre de 1933. Realizábamos la última sesión del año aprobando sobre tablas, en una brevísima sesión de dos horas, el proyecto de presupuesto donde dejé sentada mi protesta.

Frente al señor ministro de Hacienda dije, entonces: «Llamo la atención sobre el artículo 45 del proyecto que estamos discutiendo; le doy una trascendencia enorme y llamo la atención, repito, de los señores senadores, representantes naturales de las autonomías provinciales. Ese artículo dice así: «Facúltase al Poder Ejecutivo a concertar con los gobiernos de provincia las normas necesarias a la unificación y distribución de los impuestos internos al consumo y a las transacciones y el reparto del de los réditos, debiendo elevar sus conclusiones al Congreso antes del 30 de Mayo de 1934. Creo, que de consagrarse este artículo, va a hacer mucho más mal esta disposición que todas las intervenciones abusivas de aquella época que tanto hemos criticado en el país».

En aquel momento, todos protestábamos contra la invasión de las autonomías provinciales, todos levantábamos nuestra protesta; y me complazco en recordar al señor ministro de Hacienda que en aquella época era diputado, que en más de una oportunidad hizo oír con elocuencia su voz en el Parlamento y en la tribuna pública.

Pero, desgraciadamente, tenemos una tendencia notoria a olvidar toda la experiencia pasada como si esos hechos no pudieran revivir y no pudieran llegar nuevas horas amargas para el país y entonces las lamentaciones estarían de más.

Nosotros habremos concurrido con nuestra acción y con nuestro voto a producir el desquiciamiento de las autonomías provinciales, a producir el derrumbe total del federalismo nuestro, que es la base y la esencia de nuestra organización nacional.

El gobierno de la Nación ejerce una penetración económica y financiera extraordinaria en las provincias, desquicia sus instituciones y perturba completamente su marcha. Va tra-

tando de absorber facultades que son propias de las entidades provinciales y sin beneficio para nadie.

Mucha gente que no se da cuenta de lo que significa una organización provincial no alcanza a ver ese problema y así existe una corriente de opinión definida en el sentido de la unificación de los impuestos internos.

Pero, señores senadores, los impuestos internos inciden sobre fuentes de recursos que no son de la Nación, sino de las provincias, y lo primero que debemos hacer es respetar nuestra propia Constitución que señala dentro del artículo 4º y artículo 67, inciso 2º, la órbita económica de los gobiernos provinciales y del gobierno de la Nación.

Si la superposición de impuestos internos es inconveniente para la circulación de los productos, la solución puede encontrarse por otro camino, que lo da la propia Constitución. Los gobiernos provinciales pueden realizar tratados con fines de comercio o de orden económico, de tal manera que entre ellos pueden entenderse para arreglar esta situación, pero no declinar facultades propias, exclusivas, en el gobierno de la Nación para que éste se convierta en el gran padre, en el gran tutor y sufran las provincias un *capitis diminutio* y vengán luego como entidades mendicantes a solicitar el mendrugo al gobierno nacional.

¿Qué es más peligroso; que se mande un interventor arrollando la Constitución y dejándola a un lado y arrasando por completo con las constituciones y las leyes de las provincias, o esta penetración de orden económico, esta reducción a la miseria y a la pobreza de todas las provincias, que les quitará su libertad, independencia y autonomía?

Y ese era el concepto y el sentimiento dominante de todos los sectores que integran este cuerpo cuando, después de la revolución del 6 de Septiembre, se pretendió constituir la Federación Nacional Democrática. Una de las bases primeras de ese organismo propiciado entusiastamente por los socialistas independientes de la Capital, era precisamente el afianzamiento de la autonomía no solo política, sino económica de las provincias porque no habrá autonomía política mientras las provincias vivan en la miseria. Desgraciadamente eso, que se prestigió con tanto empuño en aquel momento, veo que no solamente se dejó de lado, sino que se conspira contra el principio propiciado. Y cometen un error las provincias que se prestan para este juego, porque la verdad es que, si los gobiernos provin-

ciales se reservaran para sí esas fuentes de recursos, con los impuestos a los réditos y con los impuestos internos no tendrían necesidad de claudicar ni de venir a pedir limosnas al gobierno nacional.

Replicando a estas palabras, el señor ministro dijo — y discúlpeme la Honorable Cámara que lea ahora aquel breve diálogo, porque realmente es interesante e ilustrativo — «Pero lo que es una novedad, señor senador, es que se echa máquina atrás en materia de recursos federales, y lo que antes fué una absorción pura y simple de recursos por el Estado federal, en virtud de esta ley, se repartirá con las provincias y va a convenirse la forma de darles parte de los tributos que el señor senador reclama como típicamente provinciales.» Yo le contesté: «Ese es el canto de la sirena, porque con esa atracción se consigue incorporar definitivamente al presupuesto nacional, recursos que son propios de las provincias. El impuesto a los réditos y a las transacciones debe terminar el 31 de Diciembre de 1934, y en esa forma se está preparando el terreno para que las provincias se encuentren amarradas y se entreguen mansamente a esos propósitos del Poder Ejecutivo nacional, que lo hace, desde luego, no con propósitos desdorosos, sino con el de asegurarse los recursos». El señor ministro de Hacienda, me contestó: «Yo no puedo sino admirar las vistas largas del señor senador por Entre Ríos». Le contesté: «Ya veremos el año que viene, señor ministro». Dijo entonces el ministro: «Pero en la ley que está a nuestra consideración no se prorroga en un solo día la vigencia de los impuestos que hoy rigen». Le repliqué: «Este es el principio preparatorio; es el adormecimiento para operar después libremente».

Desgraciadamente, los hechos han venido a darme la razón. Lo que anuncié el año pasado y el ministro negó, se está realizando. Ojalá me hubiera equivocado; habríamos salvado la economía del país y afianzado su situación institucional.

Hay que decir las cosas tal cual son y hay que decir las con verdad. Ahora estamos en la etapa final de la última parte de la operación que termina con las autonomías provinciales.

Las palabras sirven a veces para ocultar lo que se pretende realizar. Y este es un caso típico. El Poder Ejecutivo en su mensaje nos habla de cosas muy lindas, de los inconvenientes de la superposición de impuestos, de la guerra de tarifas, de la anarquía impositiva y

de la reconstrucción y unidad financiera del país. Pero nada de eso es lo que ha conducido al Poder Ejecutivo a traer este proyecto. Es su voracidad fiscal. Este gobierno pasará a nuestra crónica histórica con una marca inconfundible, típica: su voracidad fiscal, a pesar de ese afán permanente del señor ministro de Hacienda de querernos hacer creer lo contrario.

Una ligera síntesis probará el aserto. Este gobierno hizo suyos todos los impuestos que creó el gobierno de facto.

Se aumentaron los impuestos internos en casi todos sus rubros: alcoholes, naipes, perfumes y tabacos.

Se elevaron los derechos de muchos artículos de importación y se estableció el adicional general del 10 %, encareciendo el costo de la vida.

Se aumentaron fuertemente los renglones de la ley de sellos, algunos en un 50 %, como las hojas de actuación.

Hasta en los servicios más indispensable que establecen el comercio y relación entre las personas, como el correo, se elevaron las tasas, en algunos casos hasta el 100 %, como en las cartas simples, cuyo franco de 5 centavos se llevó a 10. Se creó el impuesto a los réditos, mal proyectado y peor practicado, repitiendo en algunos aspectos la contribución directa, con lo cual se ha ido inconstitucionalmente a mermar las escuálidas fuentes de las provincias. Se aumentó fuertemente el impuesto a la herencia. Con el nombre de transacciones se resucitó la vieja alcábala que la ciencia financiera moderna había proscripto.

El año pasado, por simple decreto del 28 de Noviembre, a espaldas del Congreso, como si no existiera Constitución, ley ni nada, como si viviéramos en pleno régimen dictatorial, se creó el más fuerte impuesto, el de las diferencias de cambio, que toma del 13 al 15 % del valor de las letras del comercio exterior en el cambio oficial y más del doble cuando el gobierno va al cambio libre.

Ahora se propicia la supresión del impuesto a las transacciones, pero no para aliviar al comercio sino para succionarlo mejor, reemplazando la tasa del 3 o/o, por la tasa del 20 o/o del impuesto a las ventas.

La unificación de los impuestos internos significará un aumento en las cargas de más de \$ 20.000.000 porque el déficit que consagra el proyecto de Diputados fatalmente debe cubrirlo el Ejecutivo en alguna forma.

Se proyecta el aumento, en tabacos, en las cubiertas de automóviles, etcétera.

Se pretende todavía, aumentar el impuesto a las herencias, sacando una contribución netamente provincial.

Sobre el rendimiento de las sociedades anónimas se aplicará una sobretasa del impuesto a los réditos.

Y esta vorágine de impuestos se establece en circunstancias extraordinarias, casi diría, trágicas.

El valor de nuestros productos exportables se ha reducido casi a la tercera parte; se produce más y se gana menos, qué digo, ganar, si apenas alcanza a cubrirse el precio de costo.

El pueblo ha soportado este desequilibrio reduciendo enérgicamente sus gastos; en cambio, el gobierno, en vez de aligerarlos en sus cargas, los ha deprimido, elevándolas con nuevas gabelas en una suma que pasa seguramente de los \$ 270.000.000 para el año en curso.

El presupuesto de gastos a cubrirse con rentas en efectivo para el año 1929 era de pesos 733.312.000 y para 1934 es de \$ 696.302.000, hay, pues, una disminución tan sólo de pesos 37.235.000. No hay relación entre la disminución de los gastos privados y las gastos públicos.

La relación entre los gastos y la producción era de 18,71 % en 1929; en el año 1934 del 22 o/oo. Marca el índice mayor de los anales financieros del país.

Frente, pues, a los haberes disminuídos de las finanzas privadas, el simple mantenimiento de las tasas anteriores significaría la duplicación de las cargas impositivas. El aumento es, pues, la centuplicación.

Dije por eso hoy, y me parece que esta ligera revista lo prueba concluyentemente, que las características de este gobierno ha sido la voracidad fiscal. Y es esta voracidad la que lo trae a propiciar este proyecto de la unificación.

Las leyes del impuesto a los réditos y del impuesto a las transacciones, que le producen alrededor de \$ 90.000.000, expiraban ahora a fin de mes. Sabía el Poder Ejecutivo que hay un clamor público contra esas leyes, y que los legisladores representantes de las provincias no se sentían muy dados a prorrogarlas. De ahí el trabajo sutil para vencer todas las resistencias. Fué aquella ley de ayuda a un grupo de provincias. Ya era un paso para vencer los escrúpulos constitucionales y todo un hermosísimo precedente. Vino después la facultad acordada al Poder Ejecutivo para concertar con las provincias las normas necesarias para la unifica-

ción y distribución de los impuestos internos al consumo y a las transacciones y el reparto de los réditos.

Y ahora ya viene el reparto, generoso según el ministro de Hacienda, con el sebo de una entrega mayor a las provincias, de las rentas producidas por los impuestos internos provinciales de los últimos años. Después de la entrega a las provincias, viene el precio de esa dádiva.

El Poder Ejecutivo no puede ocultarlo y en su mensaje dice: «El reparto entre las provincias de las sumas consignadas en las diversas disposiciones de la ley, implica para la Nación un sacrificio pecuniario, del que debe ser resarcida por modificaciones de ciertos impuestos existentes y establecimiento de algunos nuevos. Por separado se somete a vuestra honorabilidad los proyectos referentes a esas reformas fiscales y evidentemente la unificación no sería posible sin la sanción de aquellos tributos. Durante la vigencia del sistema proyectado, esos tributos — escuche bien la Honorable Cámara — podrán ser modificados nuevamente si así lo considera oportuno vuestra honorabilidad.»

Ahí, al final del mensaje, en un considerando de apariencia secundaria, está la clave de todo este asunto, que se presenta como una gran solución para la economía del país, y con hermosas palabras se oculta la mercancía de contrabando.

Con la unificación y el reparto, el Poder Ejecutivo consigue la renovación del impuesto a los réditos, el impuesto a las ventas y aumento de algunos rubros de los impuestos internos, el impuesto a las herencias y la satisfacción de algún otro apetito impositivo de última hora.

En cifras significaría esto: que en relación a los impuestos al consumo, la Nación devuelve a las provincias más o menos 44.000.000, y con ese sebo consigue rentas por valor de 270 millones. Todo el problema se reduce a los siguientes términos: para conseguir todas estas leyes que le producirán esa suma, a las provincias le devolverá aquella insignificante cantidad.

Y como ya está consagrado el asunto con la sanción de la Cámara de Diputados y con la inminente sanción del Senado, la generosidad del Poder Ejecutivo a las provincias desaparece.

Según información de los diarios de esta mañana, al considerarse el proyecto de presupuesto, se suprime la partida más importante que tenían las provincias: la subvención para la enseñanza primaria.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Es inexacto. No se ha suprimido nada.

**Sr. Eguiguren.** — Esa es la información que dan los diarios.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — No es exacto.

**Sr. Eguiguren.** — Me felicito y lo felicito.

Decía, pues, que a cambio de esa pequeña devolución, el Poder Ejecutivo se asegura cuantiosas rentas en detrimento del pueblo consumidor y de las provincias. No es, pues, un asunto de política económica, sino una exteriorización más de la voracidad fiscal del actual gobierno.

Paso ahora a caracterizar la trascendencia de este proyecto. Considero y en ello estoy de acuerdo con el señor senador por Buenos Aires, que este es el proyecto de más notoria importancia que se ha presentado en los últimos tiempos, pues no ha habido otro que tenga consecuencias próximas y remotas más extraordinarias. Sin reformar la Constitución, transformamos la organización política; del federalismo nuestro no quedará más que el recuerdo en la letra muerta de la Carta Fundamental. Este es el golpe definitivo y último para las autonomías provinciales. El gobierno nacional ha venido realizando paulatinamente una obra de penetración en las provincias, trastornando su libre y autónomo desenvolvimiento. Ha ido a las provincias con las obras sanitarias, con las obras públicas, con sus decenas de lotería, con sus aduanas, con sus recaudadores, con sus colegios, con sus escuelas, con la Defensa Agrícola, con sus veterinarios y sus agrónomos regionales; ha ido con sus subsidios a las sociedades, hospitales e instituciones de beneficencia; ha ido con sus bibliotecas y ha ido finalmente hasta con lo que, por mandato expreso de la Constitución, es requisito indispensable para la subsistencia de las provincias con las escuelas primarias.

Ya sé que se me dirá: si las provincias están golpeando continuamente ante el Congreso de la Nación con el reclamo de todas esas necesidades, ante ese mismo gobierno al que criticamos en este momento. Pero si las provincias han venido a reclamar medidas ante el gobierno de la Nación, ha sido en compensación a las rentas que la Nación ha ido a sacar a las provincias. Y la solución, ya lo he dicho en otra oportunidad, sería muy sencilla: dejar a las provincias las fuentes de sus recursos y reducir esos servicios de la Nación, que podrán substituirlos, y con ventaja, con mayor eficacia, las provincias. Entonces no vendrían aquí las provincias a pedir nada; podrían satisfacer sus propias necesidades y el gobierno de la

Nación podría ocuparse de otras cosas más fundamentales.

La Nación tiene, dentro de cada provincia, una organización financiera y burocrática superior a veces a la local. Así se explica que, cuando el gobierno central sale de su órbita y las provincias no saben defenderse, aquél hace gobernadores, diputados y hasta senadores nacionales, como ha sucedido últimamente, según es público y notorio.

No conforme con la extracción de rentas locales mediante los impuestos internos, el actual gobierno ha ido a debilitar la economía de las provincias con el impuesto a los réditos y a las transacciones. Ahora, se arrasa con los impuestos internos provinciales y ya viene la amenaza del impuesto a la herencia, y mañana será la contribución directa y al final todas las rentas de las provincias, que quedarán así convertidas en feudos del presidente de la República.

No hay autonomía política sin autonomía financiera. Este es un axioma que, por ser tal, no necesita demostración. ¿Qué hace una provincia que no puede pagar a sus empleados, que no puede hacer puentes ni caminos, que no puede defender su producción, desarrollar su industria, fomentar la educación primaria? Desaparecer como entidad autónoma.

El día en que el gobernador tenga que venir a las anteceras de la presidencia a pedir que le entreguen los recursos propios que el gobierno nacional recaude en las provincias, habrá muerto nuestro federalismo.

Este era un lugar común después de la revolución del 6 de Septiembre y uno de sus grandes propulsores ya lo dijo, el doctor Federico Pinedo, actual ministro de Hacienda de la Nación. Recuerdo que fué uno de los más entusiastas organizadores de la Federación Nacional Democrática, y uno de los puntos básicos del programa de la Federación, casi diría el eje de su acción, era arbitrar los medios para asegurar la autonomía de las provincias, pero como para llegar a eso era necesario garantizarles sus fuentes de recursos y sus medios de subsistencia, se dejó consignado que era propósito fundamental de la Federación Nacional Democrática, asegurar la autonomía económica y financiera de las provincias. ¿Qué calor y qué pasión ponía el doctor Pinedo en la defensa de ese principio! En cambio, hoy, con pena, veo al doctor Pinedo con igual entusiasmo matando aquel gran principio de autonomía!

Yo sé que se me contestará: No, está equi-

vocado; con este proyecto aumentamos los recursos de las provincias y aseguramos, afianzamos su autonomía. No ha leído el proyecto, no vé que en él hay una serie de disposiciones rígidas, terribles casi, que garantizan por parte del Banco de la Nación el manejo de esos fondos y la entrega inmediata, automática, a las provincias, con penas severas para los que dejen de cumplirlo.

¡Palabras, palabras y más palabras!

El artículo 12 de la carta orgánica del Banco de la Nación dice: «El directorio no podrá hacer préstamos a ningún poder público ni municipal, con excepción del gobierno nacional, cuyo crédito no podrá exceder del 25 % del capital del Banco.

«Los directores que autoricen operaciones prohibidas en el artículo anterior, serán responsables personal y solidariamente».

A pesar de esta cláusula tan terminante, ella ha sido permanentemente transgredida.

La ley nacional 2.737 de fomento de la enseñanza primaria, obliga al Consejo Nacional de Educación a abonar las subvenciones escolares a las provincias. Todos sabemos lo que cuesta a las provincias que no pertenecen a la misma comunión política del presidente de la República, cobrar esa subvención: periódicamente tienen que venir a la Capital los directores de enseñanza y legisladores, para que se les haga entrega de lo que se les debe. Pero, ¿a qué seguir con las infracciones a las leyes? ¿Es acaso un misterio, que a pesar de las garantías consagradas en el artículo 6º de la Constitución nacional, han sido allanadas en todas las épocas las autonomías de las provincias? Y no conozco un solo caso en que se haya hecho juicio político al presidente o a ministro alguno por esa violación constitucional.

**Sr. Sánchez Sorondo.** — Está equivocado el señor senador.

**Sr. Eguiguren.** — Es posible, por eso he dicho que no recordaba que se haya realizado juicio político.

**Sr. Sánchez Sorondo.** — Yo presenté un proyecto de juicio político...

**Sr. Eguiguren.** — ¿Pero el juicio político se realizó?

**Sr. Sánchez Sorondo.** — No, porque los correligionarios del señor senador se opusieron.

**Sr. Eguiguren.** — Si lo presentara ahora el señor senador, tenga la seguridad de que lo apoyaríamos.

Por eso dije, señor presidente, que no conocía que se hubiera realizado ningún juicio

político. Sabía que se habían proyectado, pero que quedaron sin sanción. Continúo. ¿Acaso este mismo gobierno, por simples decretos, haciendo tabla rasa de la Constitución y burlándose del Congreso, no ha depreciado nuestra moneda, no ha fijado un valor mínimo a los productos y dispuesto, sin ley ni control, de millones y millones de pesos, enorgulleciéndose todavía de esa actitud? ¿A qué seguir, pues, esa enumeración? Las provincias que no gocen de la privanza del presidente de la República, se verán privadas de sus recursos, o tendrán que pasar por las horcas caudinas. Y no se diga que hay pesimismo o suspicacia; ya una vez se sancionó por este mismo Congreso la ley de subsidio a las provincias de San Luis, Santiago del Estero, La Rioja, Corrientes, etcétera, ¿y acaso no hemos visto en las antecámaras de este mismo Senado, a algunos gobernadores que se quejaban agriamente del ministro de Hacienda, quien, a pesar de la ley, no les entregaba los fondos?

Y fíjense bien los señores senadores que ya ni siquiera se entendían con el presidente los gobernadores; éste los había relegado al ministro de Hacienda.

Puestos en la balanza los muy reducidos beneficios que esta ley puede producir y los peligros inmensos que entraña, me parece que la solución no es dudosa. Hace ya 34 años que estamos viviendo bajo el régimen de la duplicidad de los impuestos internos; cuando se sancionaron en 1890 los de la Nación, ya existían en algunas provincias. En ese largo tiempo no se han producido mayores conflictos ni contratiempos. ¿Entonces, para qué reformar un sistema que sólo nos conduciría al aniquilamiento de las provincias, a la muerte de nuestro federalismo, al caos político?

Hay que ser ciegos para no verlo. El Poder Ejecutivo nacional se arma de un instrumento formidable de poderío y destrucción, al mismo tiempo que cómodamente se hace de 270.000.000 de pesos, la mayor parte de los cuales los extraerá de las propias provincias. ¿Es posible que las provincias, por un menudrugo, por una pequeña comodidad de recaudación, se entreguen atadas de pies y manos al gobierno nacional? ¿Es posible que nosotros, representantes de esas provincias, nos prestemos para su propia ejecución?

Esta es la triste y dolorosa realidad. Cargue cada cual con su responsabilidad que nosotros salvamos la nuestra. El futuro nos dirá de las consecuencias fatales de esta ley. Yo sé que se me replicará; pero si las mismas

provincias interesadas ya han dado su conformidad y el ministro de Hacienda de Entre Ríos también se ha conformado en nombre de su gobierno. Es exacto, pero eso no prueba nada ni me convence. Me atrevo a afirmar que si se hiciera un plebiscito en mi provincia y en las demás, todas estarían en contra del proyecto de unificación; pero para manifestar su voluntad es necesario, ante todo, que exista libertad; sin este requisito no hay libertad de discernimiento, y es precisamente lo que hace falta en esta ley, a pesar de que se diga todo lo contrario.

Tengo especial interés en que me escuche el señor ministro en esta parte.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Lo he escuchado en toda su exposición.

**Sr. Eguiguren.** — Muchas gracias, pero esta parte la considero fundamental. El Poder Ejecutivo dice en su mensaje acompañando el proyecto: «Por el proyecto que someto a la consideración de vuestra honorabilidad se crea un sistema que *permite* — escuchen bien los señores senadores — a las provincias adherirse a la unificación si ven ventajas en hacerlo, pero se les *deja* la posibilidad de mantener su sistema impositivo actual si así lo desean.»

Esto es lo que se dice; veamos lo que se hace. Se fijan tasas uniformes para todo el país, aumentándolas. Las provincias que no adhieran obligarán a sus habitantes a pagar un impuesto enorme. Tomo, por ejemplo, a la provincia de Entre Ríos: en el caso de que ella no adhiera, los paquetes de cigarrillos de 0,10 centavos pagarán el nuevo impuesto de 0,04 centavos. Como la provincia tiene un impuesto de orden provincial de 0,02 centavos tendrá que aumentarse forzosamente el precio de venta del paquete de esos cigarrillos a 0,15 centavos, o en su defecto rebajarse el número de cigarrillos que contiene el paquete. Y así, el paquete de 0,20 centavos tendrá 7 y  $\frac{1}{2}$  centavos del nuevo impuesto más los 0,04 centavos de impuesto provincial; por lo que, en consecuencia habría que vender estos paquetes en 0,25, o como he dicho antes, reducir el número de cigarrillos.

Lo mismo pasará con el tabaco, con los cigarrillos, con los vinos, etcétera. De modo que el gobierno de la Nación no deja, como se dice, en libertad a las provincias sino que las extorsiona, «o aceptan estos impuestos o de lo contrario sacrifican a los habitantes de las provincias con nuevas y enormes cargas». En esa disyuntiva no hay libertad de discernimiento. Es como si el gobierno de la Nación en lugar

de venir a solicitar esta ley torniquete, mandara las fuerzas de tierra y mar a las provincias y les dijera a los gobernadores: «acepten esta ley o si no invadimos la provincia.» Por eso, sostengo, señor presidente, que, en realidad, por esta ley no se les deja en libertad a las provincias para adherirse o no adherirse a ella. Se les pone una gran maza sobre la cabeza y se les dice: ¿aceptan o no? Esa es la triste y real situación.

Si existe un propósito sincero y leal de dejar en libertad a las provincias, para adherirse a este sistema, debe intercalarse una disposición que establezca lo siguiente: «Para las provincias que no acepten la unificación regirán las tasas actuales». Es decir, permitía a las provincias que permanezcan en la situación que tienen ahora; pues si se aumenta la base del impuesto en razón de la unificación, donde no exista unificación no debe haber aumento de impuesto. Eso es lo lógico. ¿Por qué se va a establecer un aumento de impuesto en una provincia que no se adhiera? Se me dirá: «¿Cómo se hace?, vendrán dificultades enormes». No, señor Ministro, no vendrán; sucederá como está sucediendo actualmente en materia de tabacos, que las fábricas que tienen que mandar tabacos a las provincias, tienen sus oficinas para el estampillado nacional, y lo mandan a la provincia ya estampillado. No veo que pueda haber dificultades a este respecto.

De modo que si hay oposición a este sistema es simplemente porque, como lo dije al principio, este proyecto no responde a ningún concepto fundamental de economía política financiera, no responde a ninguna idea institucional, sino a un régimen basado en interés de sacar rentas, vengán de donde vengán, nada más.

Por otra parte, la unificación no significa una rebaja de impuestos.

Desde luego que en la Capital Federal y en los territorios nacionales se pagarán la suma de los impuestos nacionales, más el impuesto provincial, y es de tener en cuenta la gran población que tiene la Capital Federal y los territorios nacionales.

Para todo el país se aumenta el impuesto a los cigarrillos, tabacos y cigarrillos, y tanto es así, que para la sensación contraria, el ministro ha tenido que valerse de todo su arte y su ingenio para que el público no se aperciba del aumento. Rebaja el número de cigarrillos y la cantidad de tabaco. Los cigarrillos los rebaja de 12 a 10 y el tabaco de 15 a 12 gramos. No ha de ser muy clara la situación cuando

ha habido necesidad de recurrir a semejante procedimiento para tratar de despistar a la opinión pública. Dice el gobierno que el proyecto consagra un déficit de 18 a 20.000.000, no recuerdo la cifra con exactitud. Si el proyecto consagra un déficit quiere decir que el gobierno va a buscar inmediatamente con algún nuevo recurso la forma de enjugar el déficit, porque no es posible que cargue con esa pérdida.

Por otra parte, ya lo dice en su mensaje. Las tasas se pueden modificar en cualquier momento, de manera que por ahora aunque se pierdan 18 ó 50.000.000, el gobierno hace un gran negocio porque vendrá inmediatamente a pedir aumento de las tasas. Y yo pregunto si el Congreso le podrá negar ese aumento, si en realidad este asunto de la unificación produce un déficit.

Pero, ya se ve lo que va a venir mañana, aun cuando lo que le interesa al Poder Ejecutivo es asegurar lo que dije al principio, el impuesto a las ventas y estas nuevas gabelas que se crean para seguir cómodamente. Hubiera sido más interesante, como decía el señor senador por Buenos Aires, que el Poder Ejecutivo hubiera traído un plan orgánico de modificación de todo nuestro sistema impositivo y no seguir agobiando con estas gabelas extraordinarias al pueblo de la República.

Repito, señor presidente: considero que este proyecto va a ser de funestas y extraordinarias consecuencias y no concibo que la solidaridad política ni la vinculación partidaria pueda llevar a consagrar esto, sobre todo a nosotros, los senadores que representamos las autonomías de las provincias.

Nada más.

**Sr. Villafañe.** — Pido la palabra.

Es poco lo que voy a decir, porque casi todo lo que tenía que manifestar lo han dicho los señores senadores por Entre Ríos, al impugnar este proyecto.

Mi exposición ha de ser sí, de tono algo más fuerte que la de ellos mirando lo que ha de venir a través de mi temperamento.

Yo hubiera votado este proyecto a ojos cerrados si se hubiera tratado de unificar en otra forma, es decir, si se hubiera perseguido el imperio de la funesta doctrina del libre comercio entre las provincias. Yo acepto la doctrina del libre comercio dentro de las provincias a ojos cerrados en una Nación. Creo que los Estados de una confederación están obligados a tener las mismas cargas impositivas y no gravar con impuestos la producción de las otras provincias, creando aduanas internas.

Por desgracia, entre nosotros, el libre comercio solamente ha existido para matar las industrias del interior, para favorecer ciertas regiones del país, permitiendo la libre introducción de productos extranjeros en daño de los nuestros.

Resisto con todas mis fuerzas esta ley, señor presidente, porque veo claramente que en ella, como dice el señor senador por Entre Ríos, Eguiguren, no está en juego lo que dice la ley porque en verdad lo que está en juego es el sistema federal de gobierno, cambio que sólo ha podido hacer una convención nacional.

Se establece una forma de percepción del impuesto, de manera o en forma tal que si mañana un gobierno de provincia resulta desafecto al presidente de la República, le bastará moverle un dedo al gerente de un Banco de provincia, para que esa provincia se muera de hambre y de sed. Es cierto que se establece la penalidad en la misma ley y que se podría según ella llevar a la cárcel al que no la cumpla. Pero viene al caso el recuerdo del señor senador Eguiguren, lo que aconteció con el Banco de la Nación con su carta orgánica. Me place recordar de paso que fué mía la primera palabra de protesta en el Congreso argentino, en el año 1920, en tiempos de Irigoyen. Por la carta orgánica del establecimiento, no se podían prestar más de \$ 25.000.000 al gobierno de la Nación y se llegó a drenarle entonces 117.000.000! Interpelé al ministro de Hacienda de entonces, sin ningún resultado.

Por el artículo 12 de la carta orgánica del Banco la responsabilidad es solidaria de todos los miembros del directorio para el caso de infracciones a esta disposición. Pero esa es letra muerta. Actualmente, lo prestado por el Banco de la Nación al gobierno llega a pesos 183.000.000 más o menos, y recuerdo que fué el doctor Enrique S. Pérez quien al día siguiente de la revolución de Septiembre, cerró esa cuenta, manifestando que el Banco estaba al borde de la ruina y no podría prestar un centavo más, que estaba a punto de cerrar sus puertas, y pidió un día de fiesta para arbitrar recursos.

La forma en que se hace la distribución de los impuestos, señor presidente, en el proyecto sancionado por la Cámara de Diputados, significa establecer en el país la institución de la tiranía, para que cada presidente de la República pueda decir, si quiere: ¡yo soy Juan Manuel de Rosas!

Hace muchos años que tengo actuación pú-

blica y sé cómo tratan a las autonomías provinciales casi todos los presidentes de la República. Actualmente estamos con un presidente respetuoso de la ley y con un gobierno honrado. Pero yo pregunto: ¿Qué nos puede suceder mañana, llevando como llevamos en la entraña un mal que, a plazo fijo, tendrá que volver a darnos un gobierno como el derrotado por la revolución del 6 de Septiembre? Una ley electoral, señor presidente, que entregue el mandato de los pueblos a una mayoría ciega, como es la mayoría del electorado argentino, tiene que producir, fatalmente, con esa libertad de sufragio, el advenimiento de la barbarie, tiene que llevar al poder a los exponentes de esas mayorías; como ocurrió y para que ellos no mataran al país, fué necesario una revolución.

**Sr. Palacios.** — Entonces, todos nosotros somos los bárbaros. (*Risas*).

**Sr. Villafañe.** — No, señor. Gracias a la revolución del 6 de Septiembre, el país tiene un gobierno honesto y un Congreso que no es un circo, como el que existía antes de la revolución.

El otro punto que me mueve a estar en contra de este proyecto, es el que se refiere al instante en que vivimos, como decía el señor senador Laurencena, que no es propicio para la reforma.

Veo con pena y tristeza lo que sucede, y me pregunto por qué razón los gobiernos de provincia han bajado la cabeza y en silencio ven venir el rayo que ha de herir a ellos y a sus respectivas provincias. Pero me explico ese silencio, esa mansedumbre dolorosa por la situación que atraviesan, porque se mueren de asfixia y necesitan un poco de oxígeno, que es lo que les va a llevar esta ley momentáneamente, aunque después se mueran bajo la opresión y la tiranía. Me parece oír que dicen: ¡el que venga atrás que arree!

Es necesario que el Congreso y el país se den cuenta, por ejemplo, de cosas tan graves como lo que significa el impuesto que por la ley se aplica al vino. Es una socialización de Estado que ya la desearía Rusia.

Donde produce menos la hectárea de vino en el país, es de treinta bordelesas de 200 litros, que significan 6.000 litros. Con los 5 centavos del impuesto y 1 centavo de impuesto adicional, resulta 360 pesos de impuesto que pagan al Estado; agréguesele a eso los impuestos municipales y los territoriales y el derecho del agua, y resulta gravada la hectárea en 400 pesos. En

Río Negro la hectárea produce 70 bordelesas y hasta cien.

Me encanta que esté presidiendo esta sesión el señor senador por Salta, porque como dueño de ingenio sabe lo que significa el impuesto de 2 centavos al azúcar. Este impuesto importa un gravamen de 400 pesos la hectárea. Agréguesele el impuesto al alcohol, el impuesto indirecto que significan los fletes, y yo pregunto entonces si en alguna parte de la tierra, incluyendo los mismos rusos, se ha gravado la hectárea en 400 ó 600 pesos como resulta por la ley!

Pero el instante que pasan las provincias, el hambre y el temor a la anarquía, hacen que todos se encojan y se callen; pero yo les digo que ese miedo les ha de resultar caro, porque el mal que va a venir después será mucho más grande y sin remedio. Tenemos por delante, repito, la perspectiva de pésimos gobiernos, si hubieran de resultar fruto de la ley Sáenz Peña; pero pudiera ser que tuviéramos buenos gobiernos.

Me va a permitir la Honorable Cámara que recuerde un hecho histórico, que no resisto a la tentación de exteriorizar. Hace tiempo que estoy estudiando la historia económica del país, y he visto con asombro, que el gobierno más inteligente, más maravilloso y más económico que ha tenido el país ha sido el de Juárez Celman, sobre el que pesa una leyenda negra.

El doctor Miguel Juárez Celman, con un presupuesto ordinario de 44.000.000 y de 16 millones el extraordinario, en cuatro años que estuvo en el poder hizo cosas prodigiosas: más de 6.000 kilómetros de ferrocarriles, hizo las obras de salubridad y aguas corrientes, abrió la avenida de Mayo, centenares de escuelas de edificios públicos, dió principio a las obras del puerto de la Capital y La Plata, sembró colonias en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, San Luis y en La Pampa. Movilizó en tal forma la riqueza del país que éste verdaderamente se volvió loco, loco del delirio de las grandezas —cosa por cierto no imputable al gobernante—.

Ahora bien; se dirá que ese mandatario echó mano de las emisiones; es cierto. Precisamente la causa principal que lo echó a tierra, debió ser la causa de la grandeza y salvación del país.

Estudiando, como he dicho, las causas de la crisis del 90, afirmo que es mentira fueran el saqueo y el robo de los bancos. Me he encontrado en una lista alfabética que pedí de los deudores del Banco de la Provincia de Buenos Aires y del Banco Nacional, que los que la encabezaban eran los hombres que más gritaron contra los robos, entre los que se encontraban algunos



de los jefes más caracterizados del Partido Radical. Pero esto ha sido lo de menos.

La verdadera causa de esa crisis estuvo en que mientras el oro estaba a la par del papel, no había trabajo. El quintal de trigo valía cuatro pesos, las vacas veinte. Lo mismo sucedía con el lino, el maíz y todos los frutos de la tierra.

Nadie trabaja para perder dinero. Esa fué la verdadera causa de la crisis del 90. Cuando subió el oro a 460, el quintal de trigo se fué a 18 pesos y las vacas a 50 ó 60 y los novillos a 200 pesos. Y lo mismo todos los frutos. Esa fué la salvación del país. Y debo agregar, de paso, que no creo en las inmundicias con que se fulminaron al doctor Juárez Celman, porque es lo mismo que me ha pasado a mí con la cuestión del petróleo.

Les quité a la Standard Oil y a todas las compañías de Jujuy hasta el último palmo de tierra cuando fui gobernador; sin embargo, el pueblo está convencido de que soy millonario por haber vendido la provincia a estas empresas!

El señor senador por Buenos Aires, doctor Sánchez Sorondo, al recordar sus proyectos sobre finanzas me ha dado la tentación de recordar algo que yo he tratado de hacer en bien del país. Hace tres años, al iniciarse las sesiones de esta Cámara, presenté varios proyectos, que no me explico no hayan merecido la atención del gobierno ni de la Cámara, entre ellos uno por el que se propiciaba una emisión de 500.000.000 de pesos para construir caminos en todo el país, emisión amortizable con los 30.000.000 que produce el impuesto a la nafta.

Francamente, creo que es más lógico y más conveniente invertir una suma de dinero de una vez, en las circunstancias que vivimos, que esperar 30 ó 50 años para hacerlo con cuentagotas! Esta emisión era perfectamente garantida, y a nadie podía asustar.

Otro ejemplo. Presenté otro proyecto para edificar 10.000 escuelas haciendo una emisión de 100 ó 200.000.000 de pesos, garantida con los 10.000.000 de pesos que se gastan en concepto de alquileres por el Consejo Nacional de Educación, emisión también perfectamente garantida, amortizable en 10 ó 20 años.

Yo creo, señor presidente, que con esos dos renglones, la Nación se habría tonificado, hubiera dado trabajo a todas las regiones y movilizó la riqueza nacional. El país hubiera visto florecer sus fuentes de riqueza, y las provincias no languidecerían de necesidad como hoy acontece.

No quiero fatigar más la atención de la Ho-

norable Cámara. Quiero sí, para terminar, recordar que la Constitución Nacional califica de infames y traidores a la Patria a aquellos que conceden facultades extraordinarias al presidente de la república o a los gobernadores de provincia. Y yo creo que no sólo se conceden las facultades extraordinarias en la forma que lo hizo la Legislatura de Rozas, sino también brindándole en el hecho en bandeja de plata las facultades que han de permitirle gobernar como gobernó el tirano.

Me permito llamar la atención sobre este punto, no solamente a los señores senadores, sino también a los gobernadores de provincia, porque creo que su papel no podrá ser más triste en nuestra historia, si aceptan en silencio el dogal de esta ley.

Nada más.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Pido la palabra.

No tengo duda, señor presidente, de que el proyecto a la consideración del Senado va a ser votado esta tarde. No es la firma de los miembros de la mayoría de la comisión puesta en el despacho lo que me da esa seguridad. Supongo que el voto será afirmativo porque el Senado nacional es el intérprete certero de las aspiraciones argentinas y de las necesidades del momento y no hay dos opiniones en el país sobre la ventaja del despacho que discutimos. Acaso las tres voces, muy autorizadas, por cierto, que se han levantado hoy en su contra, son, no sólo una excepción en la representación nacional, sino en el pueblo mismo de la República. El plebiscito que proponía o que indicaba como barómetro para medir la popularidad de este proyecto, el señor senador por Entre Ríos, hubiera respondido sin duda alguna con la abrumadora mayoría de la Nación.

—Ocupa la Presidencia el doctor Julio A. Roca, vicepresidente de la Nación.

El proyecto va a imponerse por sus propias virtudes, por la idea central que lo anima, con la cual se manifiestan de acuerdo en principio aun los opositores a este proyecto, como el Senado lo ha presenciado.

No creo del caso apuntar diferencias cuando lo que interesa es señalar coincidencias. Por eso, el discurso del miembro informante de la comisión, que ha sido para mí amable, pero que ha envuelto en una abundante substancia edulcorante algunas púas más o menos perceptibles, no necesito seguirlo, señor presidente, porque él ha dicho lo fundamental para justificar la aprobación de este proyecto. Que él no forme parte de planes más amplios es...

**Sr. Sánchez Sorondo.** — Una aspiración.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — ... algo que deploro en cuanto no satisface sus aspiraciones; satisface las mías, siempre más modestas y terrestres, siempre aferradas a contemplar la realidad argentina, admirando el vasto espíritu de los que se lanzan por el espacio, trazando las proyecciones más luminosas para nuestra patria.

Acaso, señor senador por Buenos Aires, por el vulgar adagio de que apreta poco quien mucho abarca, los proyectos, sin duda interesantes del señor senador, que han contemplado aspectos sin número de las necesidades argentinas, llegan con cuentagotas al seno del Congreso; mientras que las iniciativas más terrenales, más restringidas en sus propósitos, más concretas, más imbuidas de un ingenuo realismo, se abren lentamente su camino y pueden convertirse en realidades legislativas.

El proyecto a la consideración del Senado cuenta con el apoyo raro de hombres y partidos diversos, de la unanimidad de los gobiernos de provincia que no han hecho sentir ni un solo caso de oposición a este despacho. Tiene precedentes, como se ha dicho, lejanos e inmediatos; y yo no puedo dejar de recordar, entre ellos, el que proviene de la alta autoridad del señor doctor Laurencena, padre del señor senador por Entre Ríos, y mi viejo compañero en la Cámara de Diputados.

**Sr. Laurencena.** — ¿Me permite una aclaración?

El proyecto del diputado Laurencena no era de unificación de impuestos internos...

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Era de reparto de impuestos internos.

**Sr. Sánchez Sorondo.** — Y distribuía el 80 % a la Nación y el 20 a las provincias.

**Sr. Laurencena.** — No intentaba dar una solución de fondo, sino simplemente transitoria y de forma.

**Sr. Sánchez Sorondo.** — Porque en la época en que se presentó ese proyecto, el ambiente para la unificación no estaba preparado. Pero el proyecto del señor diputado Laurencena se basaba en el reparto de los fondos de recaudación de impuestos internos, dando el 80 % a la Nación y el 20 a las provincias.

**Sr. Laurencena.** — Pero sin decir una palabra sobre lo que en ese momento recaudaban las provincias.

**Sr. Eguiguren.** — Ese proyecto, posiblemente todos los representantes de Entre Ríos lo habríamos subscrito en aquel momento en que la provincia de Entre Ríos no tenía ley de im-

puestos internos provincial. La provincia de Entre Ríos ha sostenido siempre que es institucional tocar esas fuentes que son de orden local, de manera que el señor diputado Laurencena, al presentar su proyecto, trataba de devolver a las provincias que no tenían en ese momento ley de impuestos internos, lo que consideraba que era de ellas, que es lo mismo que nosotros observamos en este momento. De manera que la situación del diputado Laurencena y la nuestra no es contradictoria.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — ¡No, cómo voy a suponer yo que hay contradicción entre las proposiciones del diputado Laurencena y el actual senador Laurencena.

**Sr. Laurencena.** — Podría haberla, señor ministro, crea el señor ministro que no siempre he pensado igual que mi padre.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Evidentemente, a mí me ha pasado alguna vez lo mismo. (*Risas*).

Lo único que he querido significar con esa referencia, es que desde los campos más diversos han llegado al Congreso argentino, la expresión de este deseo: o bien se entrega a las provincias los impuestos internos que la Nación recauda, de manera que de la unificación sólo exista el reparto o bien se propone suprimir los impuestos nacionales al consumo para dejar todo a las provincias, o bien se han proyectado medidas de la naturaleza de la que hoy aconseja la mayoría de la comisión.

Pero todo el mundo comprende que lo que no puede subsistir es el sistema actual del país, dividido por impuestos locales que cada día toman más el carácter de impuestos protectores, y los impuestos nacionales planeando por encima de ellos.

A mí me aterraría haber estado vinculado siquiera por el frágil nexo de alguna cifra enigmática en las murallas de la Catedral, a que aludía el senador Sánchez Sorondo, si ese edificio consagrara la implantación de la tiranía en la República y la supresión definitiva de las autonomías provinciales. He creído siempre que en el vasto país argentino, diversificado por la geografía, el gobierno local autónomo era una garantía de éxito; pero de ninguna manera creo, y cada día menos, que para que eso tenga buenos resultados es necesario dotar a cada uno de los poderes locales de las facultades necesarias para estorbar el desenvolvimiento de los demás.

Los fines de la ley han sido claramente expresados y me hace el efecto que el breve análisis que hizo de ellos el señor senador por Entre Ríos, doctor Laurencena, no los ha pa-

sado todos en revista. Uniformar los gravámenes en todo el país es uno de los principales fines de esta ley, y en cuanto a los impuestos internos se consigue el 100 %.

No es posible que las unidades políticas autónomas de la república impidan el desarrollo de la industria como lo exige la técnica moderna, creando en cada una de sus jurisdicciones condiciones impositivas diversas. La simple diversidad crea trabas al desenvolvimiento industrial, y si esa diversidad se hace intencionalmente con el objeto de favorecer el expendio de propios productos y trabar el de las demás, las medidas adquieren un carácter disolvente cuya gravedad es difícil exagerar.

Cuando las provincias de Entre Ríos o Santa Fe contemplan la industria del fósforo y cada una de ellas, o alguna de ellas, cree que debe beneficiar las fábricas establecidas en su propio territorio, como hoy pasa, estableciendo un impuesto distinto para el artículo de la extraña y propia procedencia, se tiende a dividir lo que la Constitución y la historia quiso que fuera un solo pueblo, y como consecuencia económica se fomenta una dispersión industrial en unidades chicas que puede ser el ideal atávico de núcleos rurales, pero que no puede ser la manifestación del pensar consciente de gobernantes modernos de un pueblo grande.

Las virtudes de la descentralización no pueden aplicarse a todo; no pueden aplicarse a lo político para llegar a veces en el ideal que hoy se nos ha expresado, hasta las esferas del crédito, convirtiéndose en migajas grandes organismos nacionales, y reemplazándoles por pequeñas instituciones locales confederadas o no, que tienen peligros inmensos y ventajas precarias.

Si los legisladores del futuro, se decidieran a fomentar en el país esos pequeños bancos y cajas regionales o municipales, en vez de los grandes bancos, con el pretexto de que la estructura económica de nuestro país es rural, como aquí se ha propiciado, se nos habría creado problemas que por fortuna para el país no están planteados.

Unificar al país no contraría sus tendencias económicas más generales, ni se le perturba sus instituciones políticas, y puede servir, señores senadores, para que no se inicien nuevos impuestos que ya están apuntando, y que muestran lo que sería el país sin la unificación.

La propia provincia de Entre Ríos acaba de dictar una de esas leyes, que será derogada si esa provincia se adhiere a la unificación. Se trata de un impuesto sobre los seguros; sobre

los seguros de vida, sobre la única garantía que tenemos los hombres de trabajo de no dejar en el desamparo a nuestra familia.

¿Concibe la Cámara que en el afán de descentralizar cada uno de los grupitos provinciales o municipales o locales, tengan su propio seguro de vida con riesgos ingentes, con la certeza de descalabros sin número y todo por el simple prurito de descentralizar? ¿Concibe la unidad en el cálculo de pólizas en la República dividida por trabas de ese orden? Es un mal augurio. Afortunadamente el Senado de la Nación lo disipará cortando una corriente perniciosa.

Otros impuestos provinciales, señor presidente, se harán dueños del terreno por las necesidades fiscales de las provincias y no se necesita ser perspicaz para vislumbrarlos. Un gran Estado argentino, anunciaba hace poco la implantación de su propio impuesto a la renta; una gran provincia argentina decía necesitar para equilibrar sus recursos un impuesto al azúcar. ¿Conciben los señores senadores el fin de semejante tendencia? ¿Adónde se llevaría la posibilidad de producir en gran escala como se necesita en la producción modernas? ¿Y la posibilidad de que funcionen con acierto grandes organismos comerciales que prestaran los servicios en este país como en todos los países modernos? Si el proyecto no tuviera más mérito que contener la tentación evidente de las provincias a complicar su sistema impositivo, gravando los consumos y acentuar su tendencia protectora sirviéndose del impuesto como una aduana, sino tuviera más que ese objeto, ese objeto bastaría para sancionarlo.

Se la sanciona como se puede, recurriendo a procedimientos sencillos, explicables e inteligibles, que si se expresan en numerosas páginas es porque la materia es de por sí compleja, pero no porque el proyecto tenga vericuetos intrincables y complicaciones imposibles de descifrar. Parte en la forma más realista de lo hoy existente: los tributos provinciales que hoy se cobran sabiendo que las provincias, si tuvieran que renunciar a una parte considerable de ellos por virtud de cualquier proyecto de unificación, no aceptarían un sistema semejante.

Es necesario garantizar a las provincias sus entradas y se les garantiza. ¿Se aumentan esas entradas? ¿Hay generosidad? ¿Hay pequeñez? Difícil, sería, señor presidente, escapar en esta materia a las censuras porque como vienen de

los dos lados opuestos, forzosamente, tiene el proyecto que encontrarse entre ellos.

Se ha censurado acerbamente al gobierno de la Nación por dispendioso al prestar su asentimiento al proyecto que viene en revisión de la H. Cámara de Diputados. Es notorio que lo que el gobierno propuso era una distribución de cantidades menores, pero es justificado el aumento. No me he hecho mucha violencia en reconocerlo y debo reconocerlo. Todo el que contemple la situación de las provincias podrá verificar el estado de déficit crónico en que se encuentran, que tiene una tendencia a acentuarse; todas las provincias argentinas han tenido este año un déficit de 11.000.000, al que se agregan 6.000.000 satisfechos por impuestos federales y gruesas sumas resultantes del incumplimiento de las obligaciones, lo que hace un déficit total para las provincias en el año 1933 de 58.000.000 de pesos. No se puede decir que un pequeño aumento que la Nación reconoce a las provincias sea exagerado, pero tampoco puede decirse que la Nación esté haciendo, como se ha afirmado, un negocio leonino y que las provincias jueguen, en este caso, todas las contingencias del que se ata a un contrato aleatorio.

A las provincias se les garantiza todo lo que puede garantizarse. Se les reconoce un aumento del 10 % por año durante cinco años, que verosíblemente es superior al aumento de la recaudación federal por concepto de impuestos internos unificados. Y luego se compara la recaudación provincial, así aumentada con un coeficiente apreciable, con el resto de la recaudación que queda para la Nación. Eso servirá de pauta para el reparto definitivo entre la Nación y las provincias, del producido del impuesto interno nacional. Juntas correrán después, Nación y provincias, la misma suerte. Es evidente que en los grandes períodos de tiempo la curva tiene que ser ascendente y las provincias se asocian así al reparto de sumas crecientes.

Pero, se dice que, si se puede aceptar el reparto de los impuestos que se cobran por el consumo, es vituperable lo que se establece respecto al reparto de los impuestos hoy cobrados por algunas provincias a la producción, que algunos señores senadores consideran aceptable y creo que algún señor senador ha considerado inadmisibles. Para mí, la cuestión tiene una fase constitucional ya resuelta en el sentido de la legitimidad de esos impuestos, y una fase económica que le quita equidad.

No es posible que las provincias se atribuyan el derecho de gravar el consumo nacional

y de llevar a sus propias arcas el producido de esos impuestos. Se ha sugerido que si el defecto no era del sistema sino de su abuso, podría corregirse por el juego de la aduana. No acierto a comprender cómo ese procedimiento habría de solucionar las dificultades con equidad. Es evidente que la rebaja de los derechos de aduana impediría a una provincia productora gravar en forma desmedida el consumo nacional si ella intentara hacerlo, pero la provincia vecina, que tiene igual producción y prácticas distintas, sería castigada por el mismo golpe que la que asumiera una actitud como la que he expresado.

La aduana federal no está para eso; no está para arreglar los entuertos internos ni para solucionar los problemas que crea la actividad impositiva de las provincias. Eso se puede constitucionalmente hacer por acuerdo, y por acuerdo se hará.

Que esta es una ley imperativa, que obliga a las provincias a incorporarse al sistema, no estoy absolutamente seguro. Puede ser que lo sea para las provincias que hoy recaudan impuestos a la producción que inciden sobre el consumo nacional. Mendoza y San Juan difícilmente podrían permanecer fuera del sistema con un impuesto nacional sobre el vino, aun cuando ese impuesto es considerablemente menor que los impuestos al consumo de las provincias, que por esta ley desaparecen. Pero las ricas y pobladas provincias litorales pueden perfectamente, si lo desean, conservar su autonomía impositiva, mantenerla íntegramente. El pequeño tributo no significará para sus habitantes una carga intolerable, y la prueba está que sólo ha podido indicarse como impuesto a soportar por la población de la provincia, como carga inadmisibles, el pequeño impuesto a los fósforos y el impuesto al tabaco, que sólo reemplaza el actual impuesto nacional y los impuestos provinciales.

Me hago cargo de una objeción formulada con toda injusticia al despacho de la Cámara, respecto a las entradas aseguradas a las provincias productoras de materias gravadas. No es exacto que los impuestos se establezcan para siempre; el decrecimiento es constante y no neutraliza ese decrecimiento sino transitoriamente el hecho de que la Nación tome a su cargo deudas provinciales; porque si se toma a cargo de la Nación deudas provinciales por el importe que se sirve con las sumas que deja de percibir la provincia, no dejan de perder las provincias recursos, porque las deudas alguna vez concluyen de pagarse y porque en el estado de las deudas provinciales, en pocos

años el juego del decrecimiento en el reparto de las provincias productoras habrá hecho absorber toda la deuda de la Nación, y luego el decrecimiento será exclusivamente a costa de la provincia.

Creo, sin embargo, que esas provincias están más que compensadas del pequeño inconveniente fiscal por la ventaja económica que significa para ellas tener el ancho campo argentino por delante como posible mercado para sus productos, y para el país, en su conjunto y para el Estado nacional en primer término; es esa también su ventaja primordial: asegurar la unificación económica del país, como se hará por esta ley, en la medida que puede hacerlo la simple desaparición de un número dado de gabelas.

Este proyecto no tiene la pretensión de unificar el país en todos sus aspectos, pero no puede discutirse que en lo que respecta a impuestos internos, la unificación significará formar una unidad con todo el territorio nacional y con toda su población, y eso se traduce en positivos beneficios económicos.

Si la Nación va a resarcirse de las pérdidas que el proyecto le origina, es una cuestión que creía yo zanjada, desde que se han dado datos fehacientes de los impuestos que dejan de cobrarse y de los que van a cobrarse. Pero el señor senador Laurencena dice que sería difícil que nos convenciéramos mutuamente y que él sigue creyendo que la Nación no pierde con este proyecto.

No creo que valga la pena discutir sobre eso. Estoy convencido de que algún pequeño déficit se va a producir por este proyecto. El Honorable Congreso decidirá si desea que otros tributos reemplacen esos impuestos. No lo hará por avaricia fiscal, lo hará, si lo hace, por necesidad nacional, pues la Nación tiene también gastos que hacer que no puede comprimir más de lo que lo ha hecho.

El señor senador Eguiguren nos ha expresado que pueden disminuirse más los gastos; que dados los recursos con que el país cuenta, mantener los impuestos actuales importa casi centuplicar las cargas. Pero lo que yo no me explico es por qué en la provincia de Entre Ríos no se ha ejercitado esa facultad que parece tan sencilla, de bajar en forma drástica los gastos, sin perjudicar todas las necesidades que hay que atender.

**Sr. Eguiguren.** — ¿Si me permite el señor ministro?

El presupuesto de la provincia de Entre Ríos se ha bajado en estos últimos años, siendo un presupuesto reducido en casi 5 ó 6.000.000

de pesos; más, se han suprimido puestos, se han reducido los sueldos y se han reducido los gastos al minimum indispensable. Tan es así, que no hay puestos para dar a nadie, porque mucha gente ha ido a la calle en razón de esa necesidad suprema de la economía; y ya no hay rubro donde economizar.

La provincia de Entre Ríos ha suprimido todo lo que ha podido, sus gastos y si pudiera más, más lo haría.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Yo tengo aquí una recopilación de antecedentes hecha por la Oficina de Investigaciones Económicas del Banco de la Nación Argentina; puede ser que esté equivocada, pero resultan estos guarismos: año 1929, \$ 17.400.000; año 1930, \$ 19.598.000; año 1931, \$ 19.200.000; año 1932, \$ 20.700.000.

**Sr. Eguiguren.** — Esos datos están completamente equivocados.

**Sr. Laurencena.** — Son sólo 15.000.000.

**Sr. Eguiguren.** — Se ha rebajado.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Serán 15.000.000, más instrucción pública, más leyes especiales, más acuerdos de gobierno.

**Sr. Eguiguren.** — Actualmente, el presupuesto suma 15.000.000; se han reducido todos los sueldos en todas las escalas, desde el gobernador hasta el último vigilante.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Celebraría que estos datos estén equivocados, aun cuando me costaría trabajo creer que todos estos guarismos no fueran exactos.

**Sr. Eguiguren.** — Es fácil probarlo.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Efectivamente.

Pero, de todas maneras, para no singularizarme con la provincia de Entre Ríos, diré que también tengo calculado el porcentaje de aumento de los presupuestos nacionales comparados con los del conjunto de las provincias y de los nacionales comparados con los de cada una de las provincias desde un tiempo más lejano y aparece, por ejemplo, que en la provincia de Entre Ríos, en el año 1933, sus gastos realizados eran el 33 % más elevados que en 1923. No hago ninguna censura por el aumento de gastos.

**Sr. Eguiguren.** — He dicho que el presupuesto de la Nación marca, en proporción a la población, el índice mayor de todos los años y de todas las épocas.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Yo no hago censura al aumento de los gastos, porque el aumento de los gastos...

**Sr. Eguiguren.** — Yo sí la hago, señor mi-

nistro, porque creo que los gastos deben estar condicionados con las necesidades.

**Sr. Ministro de Hacienda.** — ¿No cree el señor senador que podemos hablar por turno?

**Sr. Eguiguren.** — Si le molesto...

**Sr. Ministro de Hacienda.** — Yo nunca censuro el aumento de los gastos porque creo que no se puede hacer esa reunión amorfa de egresos y de ingresos y establecer que la carga impositiva del país es tanto por cabeza, y mucho menos en las provincias. ¿Qué quiere decir hoy, bajo el sistema tributario provincial, «impuesto por cabeza», en determinadas provincias? ¿Acaso el impuesto que se recauda en la provincia de Mendoza, de Salta, de Jujuy, es pagado por los habitantes de esas provincias, cuando gravan 400 pesos por hectárea, como decía el señor senador por Jujuy, o cuando gravan un producto que no se consume dentro de su territorio, sino que lo absorbe toda la población de la República? Comparaciones de ese orden son para mí muy defectuosas y no entro, por lo tanto, a averiguar de dónde ha salido este guarismo de 80 pesos por cabeza para la Nación y de 50 pesos por cabeza para determinadas provincias. Los gastos de la Nación son gastos provinciales, sus recursos no los tiene en alcancía, no los dedica a otros fines que a subvenir las necesidades argentinas en toda la extensión del país, invirtiendo en el suelo provincial una suma mucho mayor que la invertida en los territorios nacionales o en la Capital Federal.

Nada de lo que se ha dicho puede servir para justificar el régimen vigente; el sistema impositivo actual es la esencia de la anarquía y es el anunciador seguro de hostilidades entre provincias que deben ser solidarias en sus intereses. La Nación se ha propuesto darle bases para lograrlo y las provincias están dispuestas a aceptarlas.

Creerán los señores senadores que han impugnado este despacho, que no hemos meditado poco las consecuencias que traería la centralización de todo el poder en manos del Ejecutivo nacional, que no hemos deseado para las provincias la humillación de tener que peregrinar por las antecámaras de los ministerios buscando la entrega de los recursos. Por eso nos hemos esforzado en articular todas las disposiciones previsibles para que se cumpla estrictamente la voluntad del Congreso, en cuanto al reparto de impuestos entre la Nación y las provincias. Si de eso hubiera que desesperar, augurando que las leyes no se cumplieran, no sé por qué habrán los señores sena-

dores de tener confianza en el régimen actual. A alguien hay que hacer fe, y creo, señor presidente, que lo mejor es hacer fe al país, esperando que el país se sabrá dar en el futuro, gobiernos capaces de administrarlo con rectitud y de cumplir sus compromisos con honor y que las provincias se amoldarán también a las normas de esta ley, respetando las obligaciones que se les imponen, que no son, de ninguna manera, deprimentes de su soberanía. Las provincias no renuncian a derechos; las provincias contratan en virtud de que tienen derechos, como lo hacemos todos los días los particulares. No es una negación de sus derechos impositivos, sino el ejercicio de esos derechos impositivos, lo que las lleva a concertar entre sí y con el país un conjunto de acuerdos, por la adhesión a una ley.

Esta es una forma de contrato conocida en el derecho común; hay un cartabón fijado, hay una propuesta; ahora las provincias dirán si adhieren. Si adhieren, esperamos sinceramente haber puesto un jalón de importancia en el desenvolvimiento de las instituciones argentinas, haber asegurado a las provincias entradas regulares que se perciban con exactitud, haberles permitido aliviarse de deudas que hoy las agobian, haber dado a sus industrias, sobre todo, perspectivas infinitas. Ya no estarán sometidas al azar de una elección local la existencia de industrias en determinadas partes del país; es toda la Nación la que garantizará en adelante el funcionamiento de la economía argentina y la que asegurará a las instituciones políticas, que el país ha querido tener descentralizadas, recursos necesarios para que cada una cumpla su propio destino.

Nada más.

**Sr. Palacios.** — Pido la palabra.

Molestaré la atención de la Cámara por breves instantes. No pretendo aportar luces a este debate, que se ha realizado con tanta amplitud y que ya está agotado.

Quiero simplemente, este es mi propósito, dejar constancia de mi voto favorable a la unificación de los impuestos internos. Voy a votar en favor del proyecto que es una aspiración general, porque considero que él tiende a la realización de la unidad económica del país — subrayo las palabras: unidad económica del país — que sería absurdo considerar como propicia a una dictadura, ya que las dictaduras son la consecuencia inevitable del desorden y la desorganización. Unidad económica del país, que no satisface a mi ilustra-

do y distinguido colega, el señor senador Laurencena, acaso por el espíritu localista que informa su actuación parlamentaria.

La unificación permitirá una ordenación fiscal interna y la supresión de los impuestos provinciales al consumo y a la producción, substituyéndolos por gravámenes nacionales, lo que ha permitido afirmar que se consagran, transformándolos, malos impuestos, y se crea un instrumento político de opresión que podrá ser utilizado por los gobernantes, opinión esta última que he recogido de labios de uno de los más exaltados senadores de la derecha: el señor senador Villafañe, para quien la mayor desgracia que aflige al país es la ley Sáenz Peña. Es indudable que los gobiernos no necesitan de este instrumento para ejercer presión. Nuestras prácticas políticas proporcionan al Poder Ejecutivo, abundantemente, elementos para influir en las provincias.

De todas maneras, soy partidario de esta unificación que suprimirá un aspecto de la lucha interprovincial, no obstante considerar que para que no se renovara la contienda, en otros aspectos, hubiera sido conveniente sancionar la proposición que consideró buena la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, en virtud de la cual las provincias adheridas se obligaban, por el término de vigencia de la ley, a no gravar la producción de materias primas, sus derivados y subproductos, ni la elaboración, transformación e industrialización de las mismas, destinadas al consumo interno de la Nación. Proposición constitucional y clara. En primer término, porque como ya se ha dicho por algunos de los señores senadores, la Constitución nacional, en uno de sus preceptos, establece la prohibición de las aduanas interiores, que determinan la guerra económica interprovincial; y en segundo término, porque un gravamen a la producción de cualquier artículo destinado al consumo de la Nación, es un impuesto que paga todo el pueblo de la República en beneficio de una determinada provincia.

Voy a votar, pues, el proyecto del Poder Ejecutivo, pero quiero dejar consignado que subsiste, desgraciadamente, el régimen impositivo anacrónico y absurdo, atacado despiadadamente ahora por todos los sectores, por todos los hombres de gobierno, y que en 1904, cuando llegué a la Cámara de Diputados en representación del Partido Socialista, estudié ampliamente, combatiéndolo con todas mis energías; régimen que el señor miembro informante, en la presentación de sus proyectos económicos,

a que se ha referido, fustigó en este recinto hace pocos meses. Tuvo expresiones categóricas y claras, relativas a la necesidad imperiosa de que el sistema tributario desaparezca. Para él la unificación de los impuestos internos que proponía, formaba parte de un vasto plan de reformas. Pronunció estas palabras que por su acritud siento necesidad de consignarlas nuevamente en el Diario de Sesiones, ya que son también la expresión clara de mi pensamiento, enunciado hace 30 años en el Parlamento argentino.

«Vivimos bajo un régimen fiscal que no consulta ni los dictados de la técnica ni las necesidades de la población, ni las conveniencias de nuestro estado social, político y económico. Dos tercios de las cargas impositivas recaen sobre los que apenas pueden pagar los impuestos, y un tercio sobre los que pueden pagar el impuesto. Así se ha dicho, que la imposición grava en dos tercios a la incapacidad contributiva y sólo en un tercio a la capacidad impositiva. Casi todo el presupuesto se costea sobre impuestos al consumo de artículos de primera necesidad; nadie puede prescindir de ellos, pero también es cierto que una persona, por millonaria que sea, no puede consumir más allá de cierto límite. En cambio, los recursos personales están casi exentos de derechos. Por eso nuestro sistema es anacrónico y antisocial.»

Son las mismas palabras, son los mismos conceptos enunciados por el señor ministro de Hacienda en su fecunda actuación socialista en la Cámara de Diputados. Son las mismas palabras y los mismos conceptos enunciados hace 35 años por el partido que tengo el honor de representar en el Senado. Y lo curioso es que, a pesar de la crítica severa y de la convicción general del torpe régimen tributario que rige, éste subsiste y no será, por cierto, reformado con el proyecto que discutimos.

Esto nos está demostrando de una manera concluyente que la cuestión fundamental en materia de impuestos no es, sin duda, ésta que está en debate, sino la libertad de gravamen a los consumos sanos, al trabajo y a la producción. Sostengo que ya es hora de realizar el estudio integral del sistema de impuestos.

El Estado argentino ha carecido de una orientación económica y financiera que si antes no fué indispensable, hoy se impone, señor presidente, porque nuestras relaciones se han transformado desde la base hasta la superestructura y bien podemos decir, como Wilson, que las fórmulas viejas no corresponden ya a los problemas presentes. La vida de la Nación ha adquirido múltiples y variados aspectos; ya

no se refiere, solamente, a cuestiones de la estructura del gobierno o de la distribución de los poderes. Se basa en problemas de la estructura y evolución de la sociedad, en la que el gobierno no es sino un instrumento. Y es así cómo, por distintos caminos y acaso con propósitos e idealidades diferentes, coincidimos en la enunciación del problema con el señor senador de la derecha, miembro informante de este proyecto.

Podemos expresar, desgraciadamente, en presencia del cálculo de recursos, lo mismo que la Comisión Reformadora de la Constitución federal en la Convención del Estado de Buenos Aires del año 1860.

La República Argentina como Nación no ha tenido nunca un sistema regular, ni siquiera irregular de impuestos, ignorándose por completo la teoría de las contribuciones.

Recuerdo que en el año 1913, recién llegado, en el segundo período de mi actuación parlamentaria, a la Cámara de Diputados, la Comisión de Presupuesto en su informe decía que ya era tiempo de plantear la reforma de nuestro sistema impositivo; que éste no se afirmaba sobre bases científicas, ni el conjunto de sus disposiciones revelaba una tendencia a consultar la capacidad contributiva del individuo o la equivalencia del sacrificio; que, por el contrario, respondía sólo a las necesidades del Tesoro sin cuidarse mucho de la equidad de su gravitación.

El doctor Pinedo, ministro de Hacienda, ha bregado durante toda su juventud, que aún no termina (*risas*), por un régimen tributario justiciero, y recuerdo palabras pronunciadas por él, que citaré, no por mostrarlo en contradicción consigo mismo, sino por la profunda simpatía personal que me inspira y la alta estimación intelectual que por él tengo.

El doctor Pinedo decía: «Los nuevos impuestos, sobre todo los gravámenes de la renta del suelo y sobre la valorización producida por el trabajo social, que pueden indefinidamente alzarse castigando la pereza sin ocasionar perturbaciones en la producción, son los encargados de expropiar el privilegio.»

Recuerdo este concepto, en el deseo de provocar una declaración del ministro, que me permitiera repetir las palabras que como diputado, él dirigiera al ministro Hueyo en 1932. Dijo entonces el doctor Pinedo: «Me satisface haber oído al ministro de Hacienda que sólo por falta material de tiempo no se ha acometido la reforma de las leyes impositivas, pero que no piensa el Poder Ejecutivo que deban perpetuar-

se ciertas industrias al amparo de la protección aduanera». «Todo esto — agregaba el doctor Pinedo — es un buen augurio para el futuro.»

Acaso sea ahora un buen augurio para el futuro que el doctor Pinedo haya propuesto el aumento al impuesto a las sucesiones, porque eso sin duda significa gravar el privilegio, aumento que será rechazado por la Cámara de Diputados, a pesar de que el ministro ha sostenido categóricamente que es indispensable para la unificación; que no violenta el régimen federal, que su monto es reducido y que no ha abolido en ninguna parte la familia, ni ha perturbado los hogares, observando, en cambio, que es frecuente la división de la familia por cuestiones de herencias.

Me place, señor presidente, la actitud del ministro de Hacienda — aun estando en disidencia con la forma de su proyecto — porque ha refutado objeciones tardías al más justo de los impuestos y también, no me molesta decirlo, por un poco de vanidad. En el año 1904 tuve el honor de presentar en la Cámara de Diputados un proyecto relativo al impuesto progresivo a las sucesiones, que se convirtió en ley, y entonces no se escuchó la crítica acerba que se ha escuchado después con respecto al proyecto presentado por el señor ministro de Hacienda.

El doctor Saavedra Lamas, actual canceller, dijo entonces que la ley había permitido la introducción, en nuestro régimen rentístico, de la progresividad como un gran pensamiento moderno digno de desenvolvimientos futuros. El doctor Antonio de Tomaso, en un artículo de «La Nación», expresó a su vez: «Además, es fundamental en la ley obtenida por el doctor Palacios, la introducción de la progresividad, que inicia una nueva era en las finanzas del país. Lo urgente es que ese principio de progresividad se aplique pronto a otra clase de impuestos».

Y el doctor Avellaneda, en su tratado de finanzas, comentando el proyecto decía: «Es de desear que la iniciativa del espíritu nuevo llevada a la Cámara, tenga como resultado establecer un impuesto con una base verdaderamente científica, que permita disminuir o suprimir los impuestos al consumo, que abrumen al país».

No hay esperanzas desgraciadamente, de transformar el régimen impositivo absurdo que rige, a pesar de las críticas severas de los hombres de gobierno y de los legisladores de todos los sectores.

Subsisten los abusivos derechos de aduana, que ya en 1904, en representación del Partido



Socialista, denuncié como impuestos extorsivos, impuestos progresivos al revés, y que el señor ministro de Hacienda consideró en 1921, como un *sórdido instrumento fiscal*. Subsiste el adicional del 10 % calificado de *trágico* por el señor ministro de Hacienda, quien no nos da ninguna esperanza de que desaparezca. La tuvo un legislador en la Cámara de Diputados, y, rápidamente, el señor ministro de Hacienda le dijo: «Piérdala, señor diputado». (*Risas*).

Subsisten los impuestos absurdos de patentes, cuando debiera ser una verdad elemental, consignada en nuestras prácticas financieras, que todo trabajo útil, debe ser librado de gravamen.

Subsisten todos los malos gravámenes y el Poder Ejecutivo no piensa en proponer su remplazo por buenos impuestos, de acuerdo con un principio de justicia.

Hago votos fervorosos para que el ministro de Hacienda, tenga una noble inspiración y traiga el año próximo un plan integral de reformas al absurdo y anacrónico sistema de impuestos que rige en la República Argentina.

Nada más.

**Sr. Sánchez Sorondo.** — Pido la palabra.

Deseo contestar muy brevemente algunas de las objeciones que a este proyecto han formulado los señores senadores por Entre Ríos y Jujuy, pero antes debo hacerme cargo de algunas amables observaciones del señor ministro.

En el curso de mi vida pública, no había sido nunca calificado de *ángel*. Pero el señor ministro me ha dado alas... (*Risas*).

**Sr. Palacios.** — ¡Eso es muy grave! (*Risas*).

**Sr. Sánchez Sorondo.** — Ha manifestado que los planes que yo había presentado, por mucho abarcar, poco apretaban, y que él, colocándose en un terreno mucho más modesto, «terre a terre», presentaba pequeñas iniciativas que a causa de su misma insignificancia, probablemente, este Congreso solía convertir en leyes.

Ni yo soy ángel ni el señor ministro es tan poquita cosa como él se quiere calificar con toda modestia. Me bastaría, señor presidente, invocar a favor de las iniciativas que en esta materia yo he presentado, el testimonio que acabamos de oír del señor senador por la Capital y el testimonio del señor ministro Pinedo, quien, cuando ocupaba una banca en la Cámara baja, reclamaba, como lo acaba de recordar el señor senador por la Capital, del entonces ministro de Hacienda, un plan que transformara el anacrónico, antipolítico, antisocial y vetusto régimen tributario que padecemos.

Ese ha sido, señor ministro, mi pecado: haber

presentado ese plan; si es bueno o malo, eso no lo sabemos, porque no lo hemos estudiado ni discutido.

Y acaso, señor presidente, esta posición que habitualmente, diría, en que fatalmente se encuentran los ministros de Hacienda, dimana de que se olvidan de la economía; son ministros tesoreros del gobierno que, abrumados por el trabajo diario y por la atención múltiple de sus tareas, no recuerdan que las leyes fiscales, si bien pueden, como ésta que discutimos, orientar un determinado aspecto de la producción y de la industria, no pueden ser sino la resultante de leyes económicas y que las leyes financieras no son más que su aspecto externo.

Yo, a pesar de las reservas que amablemente hace el señor ministro, a quien le devuelvo, sin pretender que seamos ambos fabricantes de azúcar parlamentaria, la materia edulcorante en que él ha dicho que yo envuelvo mis exposiciones, no pierdo la esperanza de que él venga pronto con un plan de ordenamiento económico, con una plan de reforma fiscal y con un plan de leyes financieras.

En cuanto a los señores senadores por Entre Ríos y por Jujuy, quienes me permitirán que los junte en esta breve refutación, yo les diría lo siguiente: han hablado con el sentimentalismo regional, nos han hecho desfilar esa hermosa aunque hueca palabra de la autonomía de las provincias.

¿Qué es la autonomía provincial? ¿Qué es en los hechos de 1934 la autonomía provincial? Y acaso, señor presidente, ¿puede decirse que esta ley atente contra la autonomía provincial, si es que pudiéramos nosotros definirla?

Yo invito a los señores senadores contradictores a qué me citen una cláusula, una letra, una coma de la Constitución, violada por esta ley; y si no pueden citar una cláusula, una letra o una coma, ¿a qué vienen a hablarnos de autonomía?

Si la autonomía de la provincia está dentro de la Constitución y esta ley es constitucional, ¿por qué dicen que se viola la autonomía? Y si esa autonomía de la provincia que ellos reclaman no está dentro de la Constitución, es inútil que nos ocupemos de ella.

**Sr. Eguiguren.** — Recojo la invitación.

**Sr. Presidente.** — Era para después, señor senador. (*Risas*).

**Sr. Sánchez Sorondo.** — La acepto. Lo oigo con mucho placer al señor senador.

**Sr. Eguiguren.** — Muchas gracias.

En el texto de la ley no hay nada que pueda violentar la cláusula constitucional.

**Sr. Sánchez Sorondo.** — A confesión de parte, relevo de prueba.

**Sr. Eguiguren.** — He sido suficientemente claro para puntualizar en los hechos y en la práctica lo que va a suceder.

He dicho, y no se me podrá contradecir, que no hay autonomía política sin autonomía económica y financiera, y que este proyecto, precisamente, les quita rentas a las provincias y vulnera su autonomía.

**Sr. Sánchez Sorondo.** — Si el señor senador, a título de interrumpirme, me va a repetir parte de su discurso...

**Sr. Eguiguren.** — Absolutamente.

**Sr. Sánchez Sorondo.** — Yo creí que me iba a dar alguna idea nueva. Bien: estamos en lo viejo conocido.

No hay violación de la autonomía; el señor ministro lo acaba de expresar con la precisión que acostumbra. Esta ley pone en acción precisamente la autonomía de las provincias.

Pero yo les voy a decir alguna cosa a los señores senadores por Entre Ríos que probablemente los va a sorprender, los va a erizar en sus escrúpulos constitucionales.

Yo creo que el Congreso de la Nación podría dictar una ley perfectamente constitucional prohibiendo a las provincias que establecieran impuestos indirectos, porque hay por ahí un articulo de la Constitución, el número 31, que dice: «Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras, son la ley suprema de la Nación y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquier disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales», y siendo del resorte de la Nación la imposición indirecta, la Nación podría dictar esa ley, reclamando para sí...

**Sr. Eguiguren.** — Es concurrente esa facultad.

**Sr. Sánchez Sorondo.** — Perdón, señor senador; le acabo de leer un artículo que no admite interpretación: cualquier disposición en contrario que tengan sus leyes o sus constituciones. Y el Congreso de la Nación, en uso de facultades que le son propias, podría dictar una ley reclamando para sí la imposición indirecta.

Pero esta ley ha salvado, y ha salvado bien, los escrúpulos autonómicos de las provincias, porque las ha invitado previamente a una especie de Congreso en el que han estado representadas todas; también la provincia de Entre Ríos en la persona del señor ministro de Ha-

cienda, doctor Horne, y las ha consultado sobre la conveniencia de realizar esta ley y el señor ministro de Hacienda de Entre Ríos ha dicho estas palabras, que recordaré al señor senador.

**Sr. Eguiguren.** — Ya lo he dicho.

**Sr. Sánchez Sorondo.** — Son las siguientes: «El Poder Ejecutivo de la provincia ha estudiado el proyecto de unificación de los impuestos internos del Poder Ejecutivo nacional y deja a salvo por mi intermedio sus escrúpulos de orden constitucional, porque entiende que ese es un asunto que no se discute dada la forma de convenio que contempla el proyecto.»

Entonces, como quienes hablan en nombre de la provincia cuando son invitados especialmente para ello, son los miembros del Poder Ejecutivo de la provincia, ¿a título de qué los señores senadores por Entre Ríos vienen a esgrimir el concepto de la autonomía de la provincia que dicen zaherido por esta ley, si ella tiene el asentimiento expreso del propio gobierno y del pueblo a quienes representan?

Y bien, señor presidente; esta forma novedosa, hábil, diplomática y conveniente de concertar con los gobiernos de provincia leyes de este tipo y de esta trascendencia, no puede dar lugar a objeciones del carácter de las que hemos oído hoy en este recinto, porque naturalmente, no puedo ponerme a discutir sobre vaticinios; ni el señor senador por Entre Ríos, ni yo, podemos leer el porvenir. Yo no sé lo que pasará con esta ley cuando vengan malos gobernantes, y le diré al señor senador que eso no me interesa, porque las leyes buenas o malas, con malos gobernantes todas son malas y ya sabremos cómo librarnos de los malos gobernantes.

Y en cuanto a lo que dice el señor senador Laurencena, de que va a quedar en manos del gobierno nacional arruinar a una provincia, yo le diría...

**Sr. Laurencena.** — Yo no he dicho eso.

**Sr. Sánchez Sorondo.** — Perdón, señor senador. Aquí lo tengo anotado: «arruinar a una provincia».

**Sr. Laurencena.** — Yo he dicho que actualmente, con unificación o sin unificación, está en manos del gobierno nacional arruinar a una industria o a una provincia. Yo he dicho, y permítame la interrupción el señor senador, que no combato este proyecto, desde el punto de vista constitucional, porque no creo que sea inconstitucional, y que tampoco me opongo, en principio, sistemáticamente, a la unificación.

**Sr. Sánchez Sorondo.** — Entonces habría que borrar las dos terceras partes del discurso del señor senador.

**Sr. Laurencena.** — He dicho claramente que yo creía que podía haberse hecho una unificación muy buena y he afirmado que la unificación no afecta la autonomía de las provincias. Pero he creído también, y he sostenido, que no debía resolverse este problema financiero aisladamente, sino resolverse en conjunto el problema institucional y el problema económico...

**Sr. Sánchez Sorondo.** — Si lee el señor senador su discurso, verá muchos párrafos en que invoca la autonomía de las provincias que entiendo vulnerada.

**Sr. Laurencena.** — He mencionado de paso solamente, en un párrafo, la autonomía de las provincias.

**Sr. Sánchez Sorondo.** — Entonces estamos de acuerdo, señor senador, y contesto exclusivamente a su colega de representación.

**Sr. Laurencena.** — Estamos en parte de acuerdo; disentimos en otra parte, que es la que no me ha contestado hasta ahora.

**Sr. Sánchez Sorondo.** — El señor senador Eguiguren, hacía un cuadro lamentable del estado actual de la autonomía provincial. Sostiene que, en realidad, por sucesivas intervenciones del poder central — ya fuera Poder Ejecutivo, ya fuera Poder Legislativo — poco a poco se le habían ido restando a las provincias muchos de sus derechos esenciales; y citaba una serie de leyes, algunas de las cuales tuve ocasión yo también de citar, y que probablemente el señor senador no habrá oído.

Pero, señor presidente, yo pregunto, ante la queja trágica del señor senador por la intervención federal a las provincias, intervención federal que les lleva escuelas, obras públicas, ferrocarriles, puertos, dinero del Banco de la Nación, ¿qué sería de las provincias si la Nación jamás hubiera acudido en su auxilio? ¡Si los hechos que los señores senadores relatan, perfectamente exactos, no son sino el proceso de nuestro federalismo teórico! Nosotros no somos íntegramente federales; nosotros tenemos un gobierno especial con formas federales y esencia unitaria. Eso está palpitando en todos los artículos de la Constitución.

En cuanto al señor senador por Jujuy, ¿cómo voy a refutarlo, señor presidente, si él no nos ha hecho más que este pequeño cargo?: ¡somos infames traidores a la patria, porque entregamos al Poder Ejecutivo, con la unificación, facultades extraordinarias! El señor senador por Jujuy, cuya ausencia del recinto lamento, me

ha colocado en la imposibilidad de contestarle.

Bien, señor presidente, podemos votar tranquilos esta ley. Como lo dije en mi informe, representa un positivo progreso que deberá ser completado. Y este es el único punto de divergencia que tengo con mi distinguido amigo, el señor ministro de Hacienda.

Nada más.

**Sr. Eguiguren.** — Pido la palabra.

Para decir dos, simplemente, en réplica al señor senador por Buenos Aires.

Ha dicho, en primer término, que la Nación podrá prohibir a las provincias el establecimiento de los impuestos indirectos, fundada en el artículo 31 de la Constitución, al que dió lectura. Pero el artículo 31 dice: «Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras, son la ley suprema de la Nación». En orden jerárquico está primero la Constitución. Y se olvida que el artículo 4º, concordante con el artículo 67, inciso 2º, señala las fuentes de recursos del gobierno de la Nación.

**Sr. Sánchez Sorondo.** — Y señala los impuestos indirectos como del resorte del gobierno de la Nación.

**Sr. Eguiguren.** — Y para las provincias también. Lo sabe y la Suprema Corte así lo ha resuelto.

**Sr. Sánchez Sorondo.** — La Suprema Corte no es la Constitución; estamos muy acostumbrados a las variaciones de la Corte.

**Sr. Eguiguren.** — Pero aquí lo dice la Constitución y también todos nuestros antecedentes.

Ahora, con respecto a otro argumento que también hacía el señor senador, de que la Nación lleva ferrocarriles, puentes, yo le pregunto si no sería más interesante que la Nación dejara a las provincias el dinero y que las provincias hicieran los puentes, las escuelas, los caminos y todas las obras públicas, que seguramente las harían mejor todavía. Con respecto al otro argumento de la voluntad del acuerdo, ya lo dije hoy y lo repito, y no me han podido contestar lo elemental; para que dos partes contraten es necesario que estén en situación de libertad. Y eso lo he probado. El Poder Ejecutivo y las comisiones del Congreso se han cuidado muy bien de articular lo que honestamente debían haber articulado si el propósito hubiera sido dejar en libertad a las provincias, esto es, decir que en las provincias que no se adhieran, el impuesto interno será el actual, pero no como se hace, que se establece un nuevo impuesto que significa la suma de los dos, en forma tal,

que las provincias que no se adhieran tendrán un impuesto extraordinario: el impuesto nacional nuevo más el impuesto provincial, y esos gobernantes, entonces, irán contra el bolsillo y la vida de los propios habitantes de su provincia si no se adhieren. Yo le pregunto al señor senador por Buenos Aires: si él fuera gobernador o legislador de una provincia, ¿sometería a sus habitantes a esta disyuntiva: mantener su libertad a costa de sus estómagos o entregarse al gobierno nacional?

**Sr. Sánchez Sorondo.** — ¿Acaso el Congreso nacional no está compuesto por legisladores de las provincias? ¿Por qué, entonces, el señor senador, para hacer su argumento, dice que un poder extraño a las provincias dicta esta legislación para extorsionarlas, y por qué no piensa que si la ley es extorsiva, está hecha, precisamente, por los representantes de esas provincias?

**Sr. Eguiguren.** — Le voy a dar la respuesta con las propias palabras del señor senador. El señor senador nos declaró que no estaba convencido de la bondad de este proyecto tal cual viene, pero decía: soy hombre político...

**Sr. Sánchez Sorondo.** — No me declaraba convencido de la eficacia de cierta parte del proyecto, por otras razones...

**Sr. Ministro de Hacienda.** — En lo que estaba equivocado.

**Sr. Eguiguren.** — ...debo transar; y precisamente este proyecto que mata la autonomía de las provincias es el resultado de la transacción y de la concesión política.

Nada más.

**Sr. Campos.** — Pido la palabra.

He subscrito el despacho de la Comisión de Presupuesto sin ninguna dificultad y sin plantear mi disidencia, parcial, ni total, con respecto al proyecto que discutimos. Pero, la circunstancia de que el señor senador por Buenos Aires, miembro informante del despacho, haya manifestado que yo, al ser considerado este asunto en la Comisión de Presupuesto, tenía salvedades a expresar al mismo, me obligan a decir en qué consisten esas salvedades a fin de definir y precisar mi situación en este debate y mi responsabilidad con respecto al voto que he de emitir.

No creo, señor presidente, que con este asunto se logre afrontar el problema fundamental de la unidad económica nacional, pero sí entiendo que parcialmente se resuelve ese problema tan trascendental. Se consigue con este proyecto, más que la unidad económica, la unidad fiscal, y esto es, en mi concepto, funda-

mental, como que es realmente importante para los fines de la economía nacional.

Pero, señor presidente, mi disconformidad es con algunas de las cláusulas y no en principio con la idea, porque siempre he sostenido que la unificación de los impuestos es necesaria para evitar barreras interprovinciales, como a la vez, la superposición impositiva. Las salvedades que yo hacía al proyecto eran sencillamente de orden circunstancial y procedimental.

En primer lugar, tenía mis reparos respecto a la imposición uniforme que se propone del impuesto al vino. He sostenido que la graduación alcohólica es la que debe determinar el monto del impuesto con que se debe gravar este producto; si en Jujuy tenemos vino cuya graduación alcohólica es inferior a la de los vinos de Mendoza, San Juan y cualquier otra provincia, esa diferencia en la graduación alcohólica es lo que debe determinar la escala definitiva del impuesto. Sin embargo, en el despacho, el impuesto es uno solo.

Pero, no es esto sólo, señor presidente. También he sostenido que esa uniformidad de impuesto de 5 centavos por litro de vino, importará, fatalmente, la destrucción y aniquilamiento de las pequeñas industrias vitivinícolas que existen en Entre Ríos, en Jujuy y en el Sur de la República. No me decido, porque es sumamente avanzada la hora, a analizar el fundamento que se haya tenido para unificar en una sola cantidad el impuesto en toda la República; pero sigo creyendo que este sistema ha de determinar la destrucción de estas pequeñas industrias.

Por otra parte, en el artículo 10 del proyecto, se establece un promedio del que no he logrado percibir hasta ahora cuál es la cifra aritmética que va a corresponder a partir del 1º de Enero de 1940 a las provincias y a la Nación. Las provincias mantienen la proporción aritmética; una cantidad fija, inalterable, mientras que la de la Nación varía en proporción de la recaudación real de los impuestos al consumo.

Esta circunstancia determina que, a partir del año 1940, si la recaudación de impuestos internos al consumo fuera mayor, mayor será la proporción que perciba la Nación, mientras que el aumento a favor de las provincias será muy pequeño.

Además, señor presidente, con respecto a las deudas, he creído que si las provincias productoras van a compensar el 50 % que la Nación retiene para sí, con el aumento con que debe atenderse el servicio de sus deudas, estas se-

rán siempre sumas muy pequeñas, que no aliviarán sino en mínima parte los presupuestos provinciales.

Por último, llegamos a la estabilización de los impuestos internos, que, según la ley, es de 10 años. En cambio, la ley-contrato es por 20 años y 10 más de prórroga.

En primer lugar, veo un inconveniente serio en fijar la estabilización por 10 años, porque pueden existir circunstancias o hechos nuevos que aconsejen la modificación antes de ese término. Por otra parte, habrá que realizar fatalmente la modificación a partir del vencimiento del término de 10 años que se fija. ¿Cómo se establecerá esa modificación si la misma ley le fija una duración de 20 años y no pueden hacerse modificaciones sin el acuerdo de todas las provincias? Vale decir que si no hubiera acuerdo, no sería posible la modificación, aun vencidos los 10 años.

No obstante estas objeciones que hago al texto de la ley en sus detalles, analizados rápidamente, no he querido, sin embargo, plantear una disidencia parcial sobre esos puntos. Ha primado en mi espíritu y ha decidido mi criterio, para suscribir el despacho tal como viene en revisión, una razón de orden superior, cual es, la de que este proyecto constituye una gran idea por la forma como afronta y soluciona un problema fundamental para la economía general del país. Por esa razón considero que debe ser sancionado de inmediato, sin dilación alguna, a fin de que las provincias puedan adherirse con tiempo a esta ley y entrar a regir en la fecha expresada en sus cláusulas, o sea el 1º de Enero de 1935.

Frente a esta situación de apremio, cualquier objeción debía ceder a la necesidad imposterizable de su sanción. Y esa es la razón por la cual no he planteado mi disidencia parcial en el despacho, y por lo cual, he dado mi voto favorable a la misma, tanto en general, como en particular.

Nada más.

**Sr. Presidente.** — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el despacho de la comisión.

**Sr. Eguiguren.** — Pido que la votación sea nominal.

—Votan por la afirmativa los señores senadores: Serrey, Arancibia Rodríguez, Patrón Costas, Santamarina, Galíndez, Campos, Luby, Castillo, Vidal, Correa, Palacios, Rother, López Peña, Vera, Sánchez Sorondo. Arenas y Landaburu.

—Votan por la negativa los señores senadores: Eguiguren y Laurencena.

**Sr. Secretario (Figueroa).** — Han votado 17 señores senadores por afirmativa y 2 por la negativa.

**Sr. Presidente.** — Queda aprobado en general. Se va a votar en particular.

**Sr. Serrey.** — Pido la palabra.

Hago indicación que todo artículo que no se observe se de por aprobado, limitándose su lectura a enunciar el número de los artículos que están en el despacho que figura en el orden del día que todos los señores senadores tienen en sus bancas.

—Asentimiento.

**Sr. Presidente.** — Habiendo asentimiento, se procederá de acuerdo con la indicación del señor senador por Salta.

—Se vota y aprueba en particular, sin observación, los artículos del proyecto.

**Sr. Presidente.** — Queda convertido en ley. Se va a dar cuenta de dos asuntos entrados.

## 5

### ASUNTOS ENTRADOS

#### III

##### Comunicación de la Cámara de Diputados

Proyecto de ley en revisión, sobre impuesto a las ventas.

—A la Comisión de Presupuesto

#### IV

##### Despachos de comisión

##### OBRAS PÚBLICAS:

En el proyecto de ley autorizando al Poder Ejecutivo a invertir hasta la suma de \$ 528.844 m/n. en ampliación de obras de provisión de agua potable a varias poblaciones de la provincia de Córdoba.

—A la Orden del Día.

## 6

### INDICACION

**Sr. Campos.** — Pido la palabra.

Hago indicación para que se integre la Comisión de Presupuesto, mientras dure la au-